El fracaso de los acuerdos de paz en Colombia

Oto Higuita

[ediciones] dyskolo

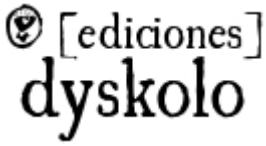
El fracaso de los acuerdos de paz en Colombia

Oto Higuita

ediciones dyskolo

El fracaso de los acuerdos de paz en Colombia

Oto Higuita



Edición digital: 1.0. Septiembre 2020

Este libro se encuentra bajo una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Ediciones Dyskolo (www.dyskolo.cc) es un proyecto sin ánimo de lucro que busca establecer una nueva relación entre quienes escriben y cuantas personas disfrutan de la lectura. Dyskolo busca fomentar la difusión de la cultura de una forma abierta, libre y participativa, publicando sus obras únicamente en formato digital, bajo licencia Creative Commons y sin restricciones tecnológicas (DRM).

Índice

1. Prólogo
2. 1. Introducción
3. 2. Origen de las guerrillas y golpes de Estado en Latinoamérica
4. 3. El primer armisticio durante las guerras de Independencia
5. 4. El reformismo constitucional y el problema de la tierra
6. 5. El origen de la violencia política
7. 6. Rojas Pinilla y su promesa de Paz, Justicia y Libertad
8. 7. Belisario Betancur: pura paja y pum, pum, pum
9. 8. César Gaviria y su jugada maquiavélica
10. 9. San Vicente del Caguán y el Plan Colombia
11. 10. El gobierno de Álvaro Uribe: la tragedia humanitaria llevada al paroxismo
12. 11. El acuerdo de La Habana para la terminación del conflicto armado
13. 12. Qué no se negoció en La Habana
14. 13. Cumplir no importa que el otro incumpla
15. 14. La derrota del proyecto histórico de las FARC
16. 15. La importancia de un movimiento social en Colombia
17. Conclusiones
    1. Notas
18. Autor

Prólogo

"Una falsa pacificación impuesta a fuego puede germinar la semilla de una nueva guerra".
Sinar Alvarado, "Las demasiadas muertes en Colombia", *The New York Times*, noviembre 1 de 2019.

El libro libre que ahora difunden Dyskolo y Rebelión, cuyo autor es Oto Higuita fue publicado en papel en 2018 con el título *El fracaso de los acuerdos de paz en Colombia*. El libro fue escrito entre el momento de la derrota en el referéndum de octubre de 2016 y antes de la victoria del candidato del uribismo en las elecciones de 2018, quien hoy ocupa la Casa de Nariño.

En este sintético escrito se hace un recorrido a vuelo de pájaro sobre la historia colombiana de las guerras y los fallidos acuerdos de paz, siempre incumplidos por el Estado y las clases dominantes. Esa reflexión termina, por supuesto, con el análisis del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

Aunque solo han transcurrido dos años desde el momento de su edición, en tan corto tiempo han acontecido muchas cosas en Colombia, que indican el fracaso del proceso de paz, cuyos documentos finales se firmaron hace cuatro años.

1

Un elemento que se destaca en la exposición es el relativo a las razones que explican el incumplimiento y la traición de larga duración de las clases dominantes en Colombia, que se remiten, y es un hecho que no se menciona en el libro, a la felonía agenciada en el año de 1781 en el virreinato de la Nueva Granada a las demandas de los insurrectos comuneros. El encargado por parte del poder colonial hispánico de firmar las capitulaciones que acordaron con los miles de comuneros que se encontraban en las goteras de Santafé de Bogotá, fue el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. Los comuneros creyeron en el acuerdo escrito, refrendado por la palabra de este personaje, y se disolvieron y a las pocas semanas se inició la represión contra los conductores del movimiento y su principal dirigente, José Antonio Galán, fue brutalmente asesinado por el poder colonial. Quien recomendó su persecución fue el propio Caballero y Góngora y el mismo estuvo detrás de los terribles castigos que se le infringieron antes de matarlo. Su sentencia de muerte, decretada el 30 de enero de 1782, proclamaba:

> Condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta cuando naturalmente muera. Que, bajado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado por la llamas (para lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo); su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos; la mano derecha puesta en la plaza del Socorro, la izquierda en la villa de San Gil; el pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes [y] declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al fisco; asolada su casa y sembrada de sal, para que de esa manera se dé olvido a su infame nombre y acabe con tan vil persona, tan detestable memoria, sin que quede otra que la del odio y espanto que inspiran la fealdad y el delito.[1]

Galán fue brutalmente ejecutado, de acuerdo con la sentencia, el primero de febrero de 1782. Por su parte, Caballero y Góngora estuvo involucrado

en una maniobra oscura que terminó con la muerte del virrey Juan de Torrezar Pimienta en 1782, a los pocos meses del fin de la insurrección de Los Comuneros, y movió los hilos para que fuera nombrado por Carlos III como Virrey de la Nueva Granada, lo que efectivamente alcanzó, y se desempeñó en ese cargo durante siete años.

Este ejemplo es un anticipo de lo que luego vendrá en Colombia: represión y escarnio para los que se rebelan y premio para los que traicionan, persiguen y masacran a los sublevados. Algo que sigue siendo una cruda realidad en la Colombia contemporánea, como lo demuestran elementales hechos que sufrimos a diario, y sobre los cuales Oto Higuita se refiere en su ensayo.

2

En el análisis histórico que se realiza en este libro se destaca la experiencia del primer proceso de paz de la historia contemporánea de Colombia, el de 1953, cuando, tras el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, se pactó la entrega de armas por parte del movimiento guerrillero que se levantó contra la hegemonía conservadora, que había sido organizado inicialmente por el partido liberal, y cuyo hecho más destacado fue la desmovilización de las guerrillas del llano, bajo la conducción de Guadalupe Salcedo Unda. Lo que vino después de esa desmovilización de campesinos insurrectos fue el asesinato de miles de ellos, incluyendo al propio Guadalupe Salcedo, quien fue acribillado el 6 de junio de 1957 en Bogotá por la policía, en una emboscada aleve y cobarde. Como suele ser común en nuestro país, el hecho fue descrito como una acción defensiva de la policía, como lo registró una nota periodística:

> Cerrado por los dos vehículos policíacos, el taxi debió detenerse pero sus ocupantes se negaron rotundamente a obedecer la orden de rendirse, antes por el contrario, uno de ellos “esgrimió desde el carro una pistola”. Acto seguido se trabó el tiroteo y momentos después dos de los ocupantes del taxi salían tambaleantes: uno de ellos cayó dentro de un zanjón y el otro en medio de la vía, mientras que los otro cuatro restantes eran capturados.[2]

Lo llamativo es que el cuerpo de Guadalupe Salcedo tenía disparos en ambas palmas de la mano, en la cabeza, en un hombro y un muslo, lo que indicaba que había sido asesinado a quemarropa y en total indefensión, porque esa era la orden. La policía siempre negó que hubiera sido un crimen de Estado, pero años después el camarógrafo de un noticiero de televisión descubrió en el Museo de la Policía Nacional, ubicado en el centro de Bogotá, la máscara necróptica del guerrillero liberal, en cuya ficha de identificación se podía leer: "Guadalupe Salcedo bandolero que operó en los Llanos Orientales, *dado de baja en operativo de la Policía Nacional*" [3]. Más claro ni el agua, del reconocimiento de un crimen de Estado, propio del terrorismo oficial que se impuso en Colombia desde el 9 de abril de 1948 y que mata a diestra y siniestra a los que considera como sus enemigos, como aconteció con el indefenso jefe guerrillero del llano.

Nos hemos referido a este acontecimiento, por su trascendencia y porque es el antecedente más parecido a lo que está sucediendo hoy con los excombatientes de las Farc. Esa eliminación sistemática y planificada de exterminar a los guerrilleros liberales, que se amnistiaron y entregaron sus armas en 1953, es similar a lo que sucede hoy. Este hecho lo recuerda Oto Higuita, quien también comenta el genocidio de la Unión Patriótica con posterioridad a los acuerdos de La Uribe de 1984. En este caso no se estaba asesinado a exguerrilleros sino a líderes sociales y políticos que nunca habían empuñado las armas, ya que fueron acribillados concejales, senadores, representantes a la cámara, alcaldes y militantes políticos, hasta alcanzar la cifra de unas cinco mil personas.

3

El recordatorio de lo acontecido con Guadalupe Salcedo no es una mera curiosidad histórica, sino una muestra de lo que se convirtió en pauta para las clases dominantes y el estado colombiano con referencia al incumplimiento absoluto de los acuerdos de paz y el asesinato de los guerrilleros desmovilizados.

Este es el primer punto que vale la pena evocar sobre la situación actual, dado que el elemento básico para hablar del cumplimiento de un acuerdo es el respeto de la vida de los excombatientes, quienes, al fin y al cabo, dejaron

las armas para evadir la posible muerte en combate. Y lo que está sucediendo en Colombia ahora mismo es un *genocidio político* de los excombatientes de las Farc, puesto que en el momento en que se escriben estas líneas han sido asesinados 230 exguerrilleros, a lo que debe sumarse 45 de sus familiares y el haber soportado unos 300 atentados. Esto se ha producido a lo largo y ancho del territorio colombiano, lo que indica que es un plan sistemático de exterminio, frente al cual reina la pasividad absoluta de la sociedad colombiana o, peor aún, la aceptación y el aplauso de un importante sector de la misma.

Que en Colombia no haya existido ni una voz de protesta tras el asesinato del primer excombatiente, lo que aconteció a principios de 2017, dejó abierto el camino hacia el genocidio en marcha, porque el silencio que es el respaldo tácito a la impunidad con que actúan los asesinos, vinculados directa o indirectamente con el Estado y que hacen parte del brazo armado del bloque de poder contrainsurgente.

Desde este punto de vista el primer aspecto que indica el fracaso del proceso de paz entre el gobierno de Santos y las Farc estriba en que no se respeta la vida de los firmantes y desmovilizados.

Además, para indicar el carácter organizado y sistemático del genocidio, han sido asesinados combatientes rasos, hombres y mujeres, mandos medios, comandantes de frente, en el campo, en ciudades intermedias y en Bogotá. Se registran hechos de sevicia contra excombatientes, como lo acontecido en Norte de Santander, cuando Dimar Torres antes de ser ejecutado fue castrado por miembros del Ejército colombiano.[4]

El asesinato de excombatientes está en la base de nuevas guerras, puesto que muchas personas prefieren volver a enmontarse y armarse antes que dejarse matar inermes y desarmados. Ahora, eso mismo vuelve a suceder, puesto que miembros del partido de las Farc se están uniendo a las disidencias o a la Nueva Marquetalia.

La asimetría de los resultados del acuerdo en términos de muertos es evidente: desde que se firmó el acuerdo y comenzó el desarme en 2016, en promedio cada cinco días se está asesinando a un antiguo insurgente, mientras que por parte de las fuerzas armadas del Estado no ha habido ni un solo muerto, causado por miembros del actual partido de la rosa.

Para darse cuenta de cómo se han modificado las cosas, digamos que, según cifras oficiales, entre 2005 y 2016 murieron 2859 integrantes de las Fuerzas Armadas en combates con las Farc[5]. Estamos hablando de una asimetría absoluta, porque ahora los muertos solamente vienen del lado de los desmovilizados, que están muriendo casi al mismo nivel que morían cuando había combates, si recordamos que desde el inicio de la Fase Exploratoria y hasta el cierre de la negociación en 2016, el Estado colombiano masacró a 303 guerrilleros[6]. En estas condiciones, la pregunta elemental es solo una: ¿De qué paz se habla si ahora están muriendo tantos insurgentes como cuando había guerra? En este caso, no hay que filosofar mucho para concluir que antes que paz, lo que está en marcha es un brutal proceso de *pacificación*, en que el bloque de poder contrainsurgente asume la labor de destruir al adversario, luego de incumplir lo pactado.

4

Entre algunos de los grandes problemas de las negociaciones de La Habana, que se han desnudado plenamente en estos cuatro años, se encuentran el no haber desmontado las estructuras paramilitares ni el terrorismo de Estado, ni haber modificado un pelo la doctrina anticomunista y contrainsurgente de las Fuerzas Armadas, ni haber logrado nada en materia de soberanía con respecto a los Estados Unidos. Tras estos grandes asuntos se encuentran otros, como los de la preservación del neoliberalismo, mantener incólume el poder de los grandes propietarios de la tierra, la ausencia de una reforma política, la forma como terminó la justicia transicional, en donde desapareció el juicio a terceros, y prácticamente quedó como una instancia para juzgar a las Farc, en una especie de tribunal de venganza. Todos estos elementos son señalados por Oto Higuita, pero con los elementos nuevos de los dos últimos años merecen ser complementados.

Al mismo tiempo, otros hechos derivados de gran importancia que han demostrado que nada ha cambiado en este país, radica en haber dejado incólume el aparato de propaganda del bloque de poder contrainsurgente, que tan útil ha sido para sustentar el proyecto antipopular y crear un

imaginario negativo con respecto a la antigua insurgencia, de odio y de venganza.

5

El paramilitarismo nunca fue desarmado y por eso hoy sigue incólume y mantiene el terror en vastas regiones del país, asesina a luchadores populares y a excombatientes y es el principal responsable de las masacres que siguen presentándose en este país. Solo en lo que va corrido de los ocho primeros meses de este año, 2020, se tienen documentadas 46 masacres en todo el territorio colombiano[7]. Cuando se supone que se están implementando los acuerdos, ¿cómo es posible que se mantengan las masacres, al mismo ritmo que se han dado en los últimos 40 años y recobren los niveles de sadismo de otros tiempos? Esto no puede entenderse desde una lógica antidrogas, que forma parte del discurso oficial del régimen de Iván Duque y de gran parte de la prensa y de los políticos de izquierda y de derecha. Afirmar eso es desconocer los problemas nunca resueltos y que fueron tocados en forma marginal en los acuerdos de La Habana (como el de la concentración de tierras y el poder de ganaderos y terratenientes), que explican la existencia del paramilitarismo, uno de cuyos soportes es la defensa de la gran propiedad y por eso se mantienen los ejércitos de exterminio, como para decir que no están dispuestos a ceder ni un milímetro de sus tierras, argumentando que existiría una supuesta transformación rural como resultado de los acuerdos.

Las masacres no son indiscriminadas ni ciegas, ni responden principalmente a las órdenes de los empresarios de las drogas de uso ilícito, sino que son obra de la contrainsurgencia de siempre para bloquear cualquier reivindicación y deseo de democratizar la sociedad colombiana. Por eso, se mata a jóvenes universitarios, a niños desplazados en los cañaduzales, a reclamantes de tierras, a ambientalistas que denuncian los megaproyectos mineros, a indígenas, campesinos y a miembros de comunidades negras, porque todos ellos son obstáculos en el proceso de acumulación traqueta de capital.

No es casual que las masacres se acentúen cuando se ha tocado, así sea solamente en términos simbólicos, a una de las columnas centrales del

paramilitarismo, personificado en un expresidente de la República y no es raro que sus voceros de prensa hayan amenazado con que eso iba a suceder si se rasguñaba al dueño del Ubérrimo. Así lo anunció en público la periodista estrella del uribismo cuando dijo: "Si a Uribe lo ponen preso, les doy una pésima noticia a sus malquerientes: no se acabarán los problemas que tiene Colombia. Tampoco llegará la paz que todos deseamos. Quizás la violencia se agudice. La Corte tiene la palabra"[8]. Dicho de otra forma, con el jefe no se metan, porque si lo hacen habrá violencia y los responsables son los magistrados de la corte que se atrevieron a realizar tamaño despropósito. Vaya casualidad, que a los pocos días de este anuncio arreciaron las masacres en todo el país.

6

Otro de los temas que demuestran el fracaso de los acuerdos de La Habana está relacionado con el imaginario anticomunista, señalador y homicida, que se ha renovado en forma burda en los últimos años, presentado con la denominación de castrochavismo, que logró imponer el No en el plebiscito de 2016, luego montó a Iván Duque como subpresidente y no ha cesado de justificar la represión y persecución de quienes no comulgan con el credo del Centro Democrático y sus áulicos.

Ese imaginario anticomunista ha justificado asesinados, montajes judiciales, señalamientos criminales a través de los medios de desinformación que indican que no se establecieron las bases para hacer política en forma legal y con seguridad, que era quizá el principal objetivo de los acuerdos y el desarme de las Farc. Nada de eso se ha realizado y se ha impuesto una macarticación constante, que muestra como si fuera un delito pertenecer al partido político de las Farc. Un ejemplo reciente ilustra lo que estamos diciendo, que se derivó de la masacre de ocho jóvenes en el municipio de Samaniego (Departamento de Nariño). Luego de que se cometió la masacre, empezaron a circular mensajes en las redes sociales que decían que esa masacre se había cometido porque los muertos eran miembros de las juventudes de las Farc, como si esto en sí mismo fuera un delito o un crimen y fuera una justificación valida del asesinato. El señalamiento llevó a que los jóvenes de Samaniego organizaran una

manifestación en la que portaban carteles en los que se decía: “No somos de las Juventudes de las Farc”.

Este es un hecho indicativo de que nada ha cambiado en este país, puesto que los jóvenes tienen que salir a la calle a decir que no son de las Farc, como si eso mismo fuera un delito, y justificara atentar contra el que pertenezca a ese partido.

Hasta el punto llega el juego macabro de esa lógica, que un reconocido miembro de la extrema derecha y ligado al paramilitarismo de los ganaderos publicó una foto en la que adulteraba este mensaje, junto con la justificación de la masacre:

¡Qué buen ejemplo de concordia y de tolerancia el que existe hoy en Colombia, que sería risible si no es porque es una justificación burda de los asesinatos contra los jóvenes colombianos! De esos señalamientos se desprende una conclusión brutal: quien sea un militante de aquellas organizaciones que son señalados como comunistas o terroristas merece ser asesinado, eso es lo que se hace a diario en este martirizado país, y tal práctica cotidiana y macabra forma parte del proyecto de pacificación en marcha.

7

El caso de Jesús Santrich denota el trasfondo del proceso de paz y la perfidia del bloque de poder contrainsurgente para incumplir lo pactado y para dejar claro que no está dispuesto a permitir la participación en política de los insertados que no se atienen al orden oligárquico en Colombia. La persecución cobarde y cínica contra Santrich se fraguó, hay que subrayarlo, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el mismo que firmó el acuerdo y le había dado la mano a Santrich y a Iván Márquez, y quien obtuvo el Premio Nobel de Paz (¡!). Pues este individuo, con ayuda de un fiscal incondicional y opuesto al proceso de paz y con la participación directa de los Estados Unidos, propició un montaje burdo, sin ningún tipo de evidencia, en el que inculparon al dirigente de las Farc de ser un narcotraficante. Para eso montaron un tinglado de mentiras, calumnias, desinformación y lo sometieron a cárcel y tortura durante varios meses y si Santrich no se les va de las manos hubiera sido asesinado o recluido en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, como Simón Trinidad, quien se hunde en las mazmorras del imperio desde hace casi 20 años.

Esta persecución fue fríamente calculada por el régimen de Juan Manuel Santos y se dirigió a aquel dirigente que no abandonó su crítica directa y frontal al capitalismo colombiano, que se negó a plegarse a las veleidades de un parlamento corrupto, que no aceptó las mentiras del bloque de poder para arrodillarse y pedir perdón por haberse revelado con las armas en la mano y que señaló que el acuerdo de paz no era el fin de un proyecto revolucionario, sino un momento más en la lucha anticapitalista, bajo otras condiciones. Todo ello resultó inadmisible para las clases dominantes de este país, y para un sector de la propia dirigencia de las Farc (que controla en la actualidad el partido) y por eso era necesario deshacerse de un personaje tan incomodo, culto y letrado, con lo que además se indicaba cuál es el verdadero alcance del desarme y la desmovilización, que no se entiende solamente como dejar de emplear las armas de guerra, sino también el arma de la crítica y aceptar las "normas de convivencia" del capitalismo colombiano, de sus medios de desinformación, de sus pseudointelectuales y aceptar como legitimo el terrorismo de Estado imperante, considerándolo como un "Estado social de derecho".

El resultado nefasto de esa persecución está a la vista: generar un efecto de demostración para que nadie se atreva a transgredir las normas impuestas, entre las cuales se encuentra alabar la tan mentada e imaginaria "democracia colombiana", conformándose con unas migajas para unos dirigentes acomodados en las sillas del parlamento. Una consecuencia directa del trato que se le dio a Santrich y a Iván Márquez fue la formación de la Segunda Marquetalia, la que desde luego no se explica solamente por este acontecimiento, pero si se catalizó por la saña que se evidenció contra este dirigente.

Las razones que explican la aparición de la Segunda Marquetalia no pueden reducirse, como hace el bloque de poder contrainsurgente, sus áulicos y gran parte de la izquierda a la vaporosa cuestión de las drogas y el narcotráfico, porque eso es desconocer no solamente los efectos del incumplimiento de los acuerdos, sino las razones sociales que explican la prolongada guerra en nuestro país. Esas condiciones ni mucho menos se han modificado, ni muestran perspectivas de solucionarse, como lo indica el trato que el régimen le ha dado a la pandemia de Coronavirus, regido por un vulgar darwinismo social a favor de los ricos y poderosos (el salvamento de Avianca por el Estado colombiano es el mejor ejemplo), y la enfermedad y muerte para los pobres y humildes, a nombre del sálvese quien pueda.

8

Otro de los elementos que muestran el fracaso de los acuerdos de La Habana está referido al regreso de la sustitución forzada de cultivos de uso ilícito, entre los que se destaca la hoja de coca. En el gobierno de Iván Duque se ha impuesto la misma fallida y criminal política antidrogas que el Estado colombiano viene aplicando desde la década de 1970, una burda copia de lo que dictamina Estados Unidos, que se centra en atacar las zonas campesinas de producción, mediante el uso de la fuerza militar y la utilización de glifosato. Este herbicida que daña la tierra, el aire, el agua y envenena a las personas, ha sido empleado en Colombia durante 35 años hasta el último período del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se suspendió su aspersión. Pero ahora, por presiones de los Estados Unidos, acogidas al pie de la letra por el régimen de Duque, se está planteando

volver a fumigar a los campesinos, lo cual se viene justificando con las masacres, con el pueril argumento que si se fumiga van a desaparecer las condiciones que las generan. Esta lógica burda sigue al pie de la letra la concepción contrainsurgente de no resolver nunca los problemas de base del país, sino recurrir a las balas y a las botas oficiales para echarle más fuego a la candela, en lugar de apagar los incendios.

Además, en diversas zonas del país han vuelto a ser asesinados campesinos cocaleros por el Ejército, como muestra de una política represiva, a lo que se reduce la presencia del Estado[9]. Y eso es lo que se hace en las zonas cocaleras y en los territorios que antes controlaban las Farc-Ep y que el Estado solamente ve como frentes de guerra y represión.

9

Las Fuerzas Armadas del Estado colombiano nunca han abandonado su doctrina contrainsurgente, anticomunista y antipopular en la que han sido formadas en los últimos 60 años. Esas Fuerzas Armadas no hablan de paz sino de pacificación, lo que quiere decir que para ellos no existen acuerdos que haya que cumplir y respetar, sino que lo que se presentó fue una derrota del enemigo, y como tal hay que asumirlo.

Esa arrogancia triunfalista de muestra a diario, en los desfiles militares, en las columnas de opinión de los militares activos metidos a periodistas, en el engrandecimiento de los pretendidos “héroes patrios” y, sobre todo, en sus acciones cotidianas de impunidad contra los pobres en campos y ciudades, que no se diferencian de lo que han venido haciendo desde hace décadas.

Eso se evidencia con las declaraciones de los Ministros de Defensa (sic) y de los comandantes de tropa, que han llegado a manifestar que ellos no creen en el cuento de la paz, ni de medias tintas por el estilo, sino en los clásicos métodos con que suelen proceder, como los de las desapariciones forzadas, los crímenes de Estado (llamadas en forma eufemística como “falsos positivos”), las violaciones de niñas y jóvenes, los bombardeos indiscriminados en que se mata en forma consciente a niños, y en toda la panoplia de retórica guerrerista contra la población civil. Sobresale al respecto el control y la vigilancia de los opositores, su seguimiento ilegal, y los métodos tradicionales de la estrategia contrainsurgente, hasta el punto de

que el New York Times señala “la vigencia de la guerra sucia, ejercida por el Estado. Y también la fragilidad de la política colombiana, que no termina de sacudirse las maneras más primitivas de la guerra”. Por ello, no extraña que

> Durante la gestión de Duque, al menos un asesinato atribuido al ejército ha sido probado, el de Dimar Torres, un excombatiente de las Farc. La violencia oficial en Colombia es un ciclo incesante donde la agresión nunca desaparece; simplemente perdura y se adapta con mínimos cambios de forma.[10]

No por casualidad en el proyecto de presupuesto general de la nación para el 2021 son destinados recursos 22 veces más altos para las fuerzas armadas que los que se dedican a agricultura, comercio e industria. Una buena parte de esos recursos son para pagar los sueldos de una tropa de 452 mil efectivos (entre militares, policías y organismos secretos) y a mantener los privilegios de la cúpula militar, que no es vigilada ni supervisada por ninguna entidad, por aquello del ruido de sables de un poderoso lobby militar enquistado gracias a la guerra interna. Y esas fuerzas armadas no quieren, desde luego, que desaparezcan sus privilegios, engrasados con la sangre y el dolor de millones de colombianos. Como bien lo ha dicho el columnista del *The New York Times* en Colombia: “Juan Manuel Santos, el expresidente pacificador, de algún modo prefirió dejar quietos a los hombres de armas con tal de comprometerlos en su meta principal”, que no era otra que desarmar y desmovilizar a las Farc-Ep.[11]

10

Colombia siempre ha sido un foco de conflicto en Sudamérica, por los efectos de nuestra guerra interna y eso ha sido promovido por los Estados Unidos en su propio beneficio estratégico. En concordancia, el Tío Sam está detrás del proyecto contrainsurgente que se impuso en nuestro país desde la década de 1950 y se vincula con el mismo proyecto en el resto del continente. Las clases dominantes de Colombia han sido incondicionales al dominio estadounidense desde mediados del siglo XX, lo que se ratificó con

la adopción del Plan Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), que comenzó mientras se realizaban los fallidos diálogos del Caguán y fue implementado a sangre y fuego por el régimen de Álvaro Uribe Vélez.

Ese Plan Colombia no era de uso exclusivamente interno, sino que tuvo una dimensión continental para asegurar la hegemonía de los Estados Unidos en tiempos de emergencia de gobiernos progresistas en el continente. Desde un comienzo era claro que el Plan Colombia no pretendía luchar contra las drogas, sino que tenía finalidades contrainsurgentes más allá de Colombia, y en particular se dirigía contra la Venezuela bolivariana de Hugo Chávez.

Venezuela participó activamente como mediador en los diálogos de La Habana, con la perspectiva de que la paz interna en Colombia contribuyera a reducir agresiones y provocaciones en la frontera, pero sucedió lo contrario, porque la desmovilización de las Farc significó que el gobierno de Juan Manuel Santos, con felonía calculada y al servicio del imperialismo estadounidense, reforzara el nefasto papel de Colombia de usar su territorio para agredir a Venezuela, lo que se acentuó durante el régimen de Iván Duque, que es una ficha servil e incondicional de los Estados Unidos.

Sobre la presencia de tropas en los Estados Unidos en territorio colombiano, la revista Semana hizo esta confesión: “En el pico, hubo alrededor de 1.000 soldados y contratistas y hasta 51 edificios militares estadounidenses en Colombia. Esos números han disminuido sustancialmente. ¿Sería posible el desembarco de "5.000 tropas" en el país, como sugería la libreta de Bolton?”.[12]

Y como parte de esa agresión sobresale el reforzamiento de Colombia como un portaaviones terrestre de los Estados Unidos, con sus numerosas bases y presencia militar y mercenaria (que se demostró en forma nítida con la agresión del 3 de mayo de 2020 (Operación Gedeón) contra territorio venezolano), el aumento de tropas estadounidenses en nuestro territorio y el proyecto de “Colombia crece”, que es simplemente la continuación del Plan Colombia.

Con bombos y platillos, el régimen de Duque y enviados de los Estados Unidos, entre ellos del Comando Sur, anunciaron la inversión de 5000 millones de dólares para el nuevo plan. El anuncio retórico se basa en los

mismos supuestos de hace 20 años, combatir el narcotráfico, lo cual ya es falaz, porque siempre se dijo que ese Plan había sido un éxito en su lucha contra las drogas. Esa es la forma, porque el fondo es el mismo de siempre, es un proyecto contrainsurgente y en este caso específico, que va dirigido contra Venezuela. En concordancia se refuerza el proyecto de Zonas Futuro, aprobado en enero de este año, y en el que ya se anunciaba el dinero de Estados Unidos. Lo llamativo es que algunas de esas zonas limiten con Venezuela, algo que no puede pasar a segundo plano, en momentos en que arrecia la agresión contra el hermano país.

En conclusión, puede decirse que los acuerdos de Paz con las Farc en lugar de ser un hecho que contribuyera a la paz regional dejo las manos libres del Estado y de las Fuerzas Militares tras la desmovilización de esa insurgencia, lo que afianzo la estrategia de convertir nuestro territorio en punta de lanza contra Venezuela, como parte de la guerra híbrida y no convencional que Estados Unidos libra contra ese país, y en donde Colombia desempeña un vergonzoso papel de títere amaestrado.

El problema es que, en cualquier momento, eso podría terminar en un conflicto de otra índole con repercusiones inimaginables para nuestro país, que recordemos tiene una frontera con Venezuela de 2219 kilómetros.

11

En términos estructurales el tema de la tierra es el asunto más álgido del país y que se tocó como primer punto de los acuerdos, donde se dice:

> …Que a juicio del Gobierno la transformación estructural del campo debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las Farc-Ep dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales.

Al respecto, al 31 de marzo de este año al Fondo de Tierras, que se estipuló en el acuerdo, habían sido transferidas 1 millón de hectáreas, que corresponde al 30% del total estipulado. Lo más significativo es que hasta ahora no se haya adjudicado ni un solo predio a los campesinos, como resultado del acuerdo, al punto que Jairo Estrada, representante en la Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi) «Nosotros no conocemos los campesinos de carne y hueso que puedan decir "por cuenta del Acuerdo de Paz me entregaron esta tierra gratuitamente que provenía del Fondo de Tierras"».[13]

Junto al Fondo de Tierras, en el acuerdo se planteó la formalización de la entrega de siete millones de hectáreas de tierra a los campesinos que las poseen o son sus dueños y eso debería cumplirse en el 2026. Hasta el momento solo se han formalizado 100 mil hectáreas, lo que indica la lentitud del asunto, paquidermia característica de la historia colombiana cunado de repartir la tierra se trata. Un estudio de La Contraloría General de la Nación indica que a ese ritmo se van a necesitar 25 años adicionales para cumplir ese acuerdo.

Adicionalmente, en el campo no ha cesado la violencia y la persecución a campesinos, indígenas y reclamantes de tierras, que están siendo sometidos a un proceso sistemático y planeado de exterminio, que organizan y financian los grandes terratenientes y ganaderos, que crearon un ejército antirrestitución de tierras, que viene operando desde hace años y que ha aumentado sus acciones criminales, luego de la firma del acuerdo de La Habana.[14]

12

Un último punto en esta presentación, sin ser exhaustivos ni agotar el tema. En el registro del año anterior sobre el asesinato de ambientalistas en el mundo, Colombia ocupó el deshonroso primer lugar, lo cual se complementa con la destrucción de gran parte de nuestro manto forestal, mediante los incendios programados en nuestros bosques de la amazonia, del Choco y de otras regiones del país. Este hecho se explica en gran medida por el proyecto pacificador del bloque de poder contrainsurgente, con sus terratenientes y ganaderos al frente, de tomarse los territorios a los que hasta

hace pocos años no habían podido llegar, en su propósito de abrir fundos ganaderos, lotes para sembrar cultivos de exportación (palma aceitera, caña de azúcar, caucho…), extraer petróleo, minerales y explotar recursos forestales. Esa nueva conquista solo ha sido posible por la salida de las Farc de esos territorios, que por la guerra se habían mantenido lejos del saqueo.

Los campesinos de varias regiones del país vieron la llegada desde finales del 2016 de gente que no conocían y que traían grandes máquinas para limpiar la tierra. Por ejemplo, en el Bajo Caguán,

> don Emilio Rojas Moncada, campesino y colono desde los años ochenta, habla de su angustia frente a la llegada de nuevos actores al territorio y de lo que él considera un desastre ecológico terrible: la tala y quema de cientos de hectáreas de bosque. "Hay partes donde han tumbado entre 200 y 300 hectáreas, y no son campesinos. A la zona está llegando gente de afuera, grandes empresarios que amenazan no solo la montaña, sino la seguridad de todos nosotros".

En forma lapidaria la Revista Semana lo ha dicho: "En muchos de los territorios donde antes dominaba la guerrilla se ha disparado la deforestación", por lo que, en muchas regiones del país, "la naturaleza es la principal víctima de la paz".[15]

13

Después de todas estas vueltas, regresamos al libro de Oto Higuita, del que no nos habíamos olvidado. Simplemente estábamos actualizando algunos de los aspectos que allí se mencionan. Y queremos cerrar con una idea que se encuentra en las últimas paginas del libro, que con el proceso de paz se selló una "derrota estratégica", lo que llevó a que no se consiguiera nada significativo en el acuerdo y se impusiera la lógica del bloque de poder contrainsurgente y se presentara una separación radical entre la dirigencia de las Farc y sus bases históricos, que son las que están siendo exterminadas.

Ese bloque de poder tiene dos fracciones definidas que con diferencias de matiz no son antagónicas y, en términos de eliminar la insurgencia, se identifican plenamente, con la diferencia de que el sector terrateniente (el

uribismo) solo piensa en la destrucción militar del enemigo, mientras que el sector financiero (representado ahora en el santismo) combinó la acción militar con el dialogo. Pero, finalmente, eso condujo al efecto deseado de destruir a las Farc, y luego de conseguido ese objetivo, el uribismo completa la tarea de hacer trizas lo acordado, y con ello mata a los antiguos insurgentes y elimina cualquier atisbo de democratización real en la sociedad colombiana.

A la conclusión de la derrota estratégica se llega con dolor, puesto que los previsibles resultados están a la vista al ver como se esfuma la posibilidad de que terminara la guerra en Colombia y se emprendiera el camino de construir una sociedad decente. Ese mismo dolor es que sentimos los colombianos que soñamos y luchamos por otro tipo de país y vemos frustrado otro intento más de alcanzar una paz negociada, que beneficiara a la mayoría de los colombianos y que significara que se pudiera hacer política sin el riesgo de morir en el intento.

Por esta razón, tanto Higuita como nosotros escribimos con un dolor que nos carcome las entrañas, ante la criminalidad del bloque contrainsurgente y la impotencia que eso genera. Y también causa desazón constatar la manera como, luego de la firma de los acuerdos, se fueron disgregando las Farc, hasta convertirse en la actualidad, como lo había vaticinado, el malogrado François Houtart, en un "pequeño partido socialdemócrata". Pero es otro tema, que queda fuera del marco de nuestro análisis, ya que hemos querido centrar la atención en la perfidia, traición e incumplimiento por parte de ese bloque de poder contrainsurgente, lo que en últimos implica la prolongación de la guerra, con sus secuelas de sangre, horror y sufrimiento para la población colombiana. Por ello, vuelven a cobrar validez las palabras de Manuel Marulanda Vélez cuando sostuvo: Volveremos a hablar de paz dentro de 20 mil muertos.

Renán Vega Cantor. Septiembre de 2020.

(Fue miembro de la 'Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas', creada en la mesa de dialogo de La Habana).

Dedicado a Juan David Quintana, Luis Fernando Wolff y todos los líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia.
In Memorian.

1. Introducción

Colombia vive el enésimo intento de ruptura con un pasado dominado por un largo conflicto social y armado que ha causado millones de víctimas y parece no tener fin. Es, tal vez, la prueba más importante de su historia luego de dos siglos de republicanismo, tras las guerras de Independencia contra España que culminaron en las primeras décadas del siglo XIX, pero que luego arreciaron en forma de enfrentamientos entre facciones y caudillos locales por el poder.

Se trata del fin de la guerra de más de medio siglo con la guerrilla más antigua del país, hecho comparable únicamente con el que se dio en el año 1953 durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, quien bajo promesas cosméticas de *Paz, Justicia y Libertad* logró desmovilizar cerca de 30 mil campesinos de las guerrillas liberales del Llano.

Los acuerdos con las guerrillas en los 80s (Belisario Betancur) y 90s (César Gaviria) tampoco fueron el remedio para alcanzar la paz, quizás un paliativo que terminó agitando de nuevo la confrontación así haya arrojado una nueva Constitución, al punto que la inclusión de unas guerrillas y la exclusión de otras como sucedió con las FARC y el ELN en las negociaciones con César Gaviria no hizo sino prolongar el conflicto armado por más tiempo.

Decir el "fin" de la guerra en Colombia genera bastante duda e incredulidad en una sociedad acostumbrada a que sus gobernantes le incumplan, a quedar mal consigo misma por la indiferencia ciudadana, y

a incumplir con la comunidad internacional. El hecho de que la guerra siga viva y *cosechando vidas*, es una prueba irrefutable de ello.

¿No está la sociedad colombiana suficientemente preparada para el fin del conflictivo armado? ¿Será cierto que quienes han gobernado el país jamás cederán algo de su poder y privilegios a cambio del fin de la guerra?

Si es lo primero, habrá que preguntarse entonces qué se necesita y cómo preparar la sociedad para un pacto nacional *duradero* por la paz y la reconciliación. Particularmente a la generación actual le compete asumir esa responsabilidad histórica, cuenta con más y mejores herramientas y condiciones para ello que las anteriores.

Si es lo segundo, es como si Colombia estuviera condenada a vivir cien años más de guerras y frustración como sociedad y aceptar que vivimos atrapados en una cápsula del tiempo de la que no hay escapatoria y cuyas llaves siguen en manos de los mismos.

Analizar críticamente ese pasado, pero sobre todo lo que hace que parezca no finalizar sino continuar esta guerra crónica; esa angustiosa sensación de desesperanza que produce la tragedia repetida en la misma escena, el mismo lugar y por las mismas motivaciones, es la principal razón para escribir este ensayo.

Al hacerlo, se ubica el pasado reciente y sus principales actores y responsables, buscando sacar enseñanzas, indagando en cada uno de los períodos en que se intentó sin éxito, como parece que sucederá nuevamente, un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las guerrillas, que termine definitivamente el enfrentamiento armado.

Se analiza y se discute, entre otros temas, el *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*, resultado de la Mesa de Negociaciones de La Habana (2016) [16], en adelante *Acuerdo Final*, entre el Estado colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y las FARC.

Se incluye una breve contextualización sobre los diferentes conflictos armados en América Latina durante el siglo XX, señalando los elementos comunes entre éstos y el conflicto armado en Colombia,

pero también para descartar la creencia de que fue un fenómeno que se dio en el continente como simple repetición de la historia y no como resultado de las contradicciones y disputa por el poder.

Se señala la importancia de la Constitución de 1991 resultado del acuerdo político que propició un ordenamiento jurídico nuevo, deslindada de una tradición constitucional conservadora y confesionalista de más de cien años de la Constitución de 1886, destacando el avance democrático de la nueva Carta en derechos fundamentales, la acción de tutela, la acción popular, el reconocimiento de los pueblos originarios, su historia y cultura, así como de los pueblos afros y sus derechos ancestrales.

El ensayo es, ante todo, una lectura crítica de la responsabilidad política e histórica de los sectores sociales que han utilizado el Estado para su beneficio exclusivo y la defensa de sus intereses, a costa de transgredir el ordenamiento jurídico y cometer graves violaciones a los Derechos Humanos.

Se plantea, igualmente, el papel que los grandes medios de comunicación han jugado en la representación y el imaginario que la mayoría tiene sobre el conflicto, su origen y actores, quienes atribuyen particularmente a uno de ellos, las guerrillas, la responsabilidad del mismo.

Finalmente, es una discusión sobre la historia pasada y reciente, donde es clave el debate sobre las responsabilidades que suscita la actual fase de implementación de lo pactado —una de las tesis del ensayo—.

2. Origen de las guerrillas y golpes de Estado en Latinoamérica

La mayoría de pueblos del continente viven una situación caracterizada por las tensiones sociales, contradicciones y disputas por el poder, de ahí que sea lo primero que se aborde aquí, el contexto histórico latinoamericano a partir de las revoluciones y levantamientos armados del siglo XX. La idea no es explicar por qué la lucha armada revolucionaria desapareció de todos los países del continente, sino contextualizar el ambiente en que estas surgieron y las motivaciones que las impulsaron. La experiencia de la lucha armada colombiana aparece sola hoy ante los demás países por las particularidades y condicionantes históricos que la determinaron.

Aparte de la revolución mexicana de 1910, primera de un siglo que despuntó cargado de bríos emancipatorios anunciando una verdadera reforma agraria que distribuyera la tierra entre los pobres del campo, y del levantamiento campesino de El Salvador en 1932[17] que fueron aplastadas, traicionadas y sucumbieron a las disputas internas; sin duda la revolución que determinó como ninguna el rumbo de las luchas entre las capas excluidas y privilegiadas, y la disputa entre el socialismo y el capitalismo, fue la revolución cubana cuyo triunfo el 1 de enero de 1959, significó la derrota de la dictadura de Fulgencio Batista, apoyada y sostenida por el imperio norteamericano, dando impulso a un ciclo revolucionario continental.

La Revolución cubana desató una ofensiva del imperio del norte de gran alcance que va para 60 años y no ha terminado; diseñada a partir de un programa estratégico como la *Alianza Para el Progreso*, con el propósito de fortalecer los acuerdos de cooperación con los gobiernos del continente para combatir los movimientos revolucionarios[18]. Ya el gobierno del presidente J. F. Kennedy había anunciado que "no tolerarían una revolución socialista en su área estratégica"[19].

Debido a ello, la Revolución cubana se convertiría en uno de los principales ejemplos y fuente de inspiración de la lucha revolucionaria del siglo XX en América Latina, apoyando el argumento de que por la vía pacífica y electoral no serían posibles la trasformación y los cambios profundos y urgentes que requerían las naciones del continente, cambios que las democracias liberales en cada nación no estaban dispuestas a realizar, así como tampoco permitir el avance del comunismo, dando pie a la instauración de las dictaduras.

Esta situación generó una dura discusión entre los partidos comunistas y la izquierda latinoamericana, que llevó a muchos a romper con la concepción que priorizaba la estrategia electoral para conquistar el poder y a adoptar la lucha armada como solución. Lo cual produjo la división entre la *izquierda revolucionaria* que priorizaba la lucha armada y los *reformistas* que defendían la vía legal y la lucha electoral dentro del Estado liberal burgués, postura que defendieron los partidos comunistas y socialistas partidarios de la línea soviética, que sostenía la tesis de la revolución en un solo país. Ese fue el contexto ideológico en que surgieron las guerrillas en Latinoamérica (Harnecker, 1998, p. 44-45).

Sin embargo, el hecho que más agudizó las diferencias dentro de la izquierda latinoamericana, fue lo que sucedió en Chile con la Unidad Popular que llevó a la presidencia a Salvador Allende (1970-1973), gobierno al que se criticó de reformista por negarse a entregarle armas al pueblo para defender con estas la conquista del poder, y en cambio aceptó incondicionalmente las reglas del Estado liberal; gobierno que, como lo demostró el violento golpe de Estado del 11 de septiembre de

1973 y la brutalidad de la dictadura, no iba a ser permitido por el imperialismo y la burguesía chilena, por el contrario, lo que hicieron fue subvertir el orden constitucional vigente.

Con el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, en el cual tuvo una abierta participación la CIA como lo reconoció el mismo Secretario de Estado Henry Kissinger[20], las diferencias dentro de la izquierda latinoamericana llevaron a grandes rupturas y divisiones.

Bajo esas condiciones, la izquierda revolucionaria de marcada naturaleza urbana y universitaria se declaró partidaria de la lucha armada y dio inicio a la conformación de movimientos guerrilleros en casi todos los países del continente.

Fue así como en Argentina, en la zona limítrofe con Bolivia, Zalta, el periodista Ricardo Masetti fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), con el apoyo del Che Guevara, en 1963. En Venezuela las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y Bandera Roja; en Guatemala las Fuerzas Armadas Rebeldes y UNRG; en Perú, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el ELN, el MRTA y Sendero Luminoso; en Nicaragua el Frente Sandinista; en el Salvador el FFMLN; en Colombia las FARC, el ELN, el EPL, el M-19; en Brasil el MR-8 y el ALN; en Bolivia el ELN y el EGTK; en Uruguay el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros; en Paraguay el Ejército del Pueblo Paraguayo; en Chile el FPMR y el MIR; en Ecuador el Alfaro Vive ¡Carajo![21]

A este ambiente de lucha armada que se vivía en el continente, se sumó el impacto que produjo la Revolución nicaragüense en 1979. Insurrección que encabezó el Frente Sandinista de Liberación Nacional apoyada por los gobiernos de Venezuela, Costa Rica, Panamá y Cuba. (Harnecker, 1998, p. 66).

La nueva revolución hizo que las contradicciones y tensiones políticas en el continente se intensificaran, desatando como respuesta una serie de golpes de Estado que impusieron dictaduras y juntas cívico-militares anticomunistas apoyadas y dirigidas por la CIA y el Departamento de Estado. El objetivo de la CIA era claro, frenar el auge

de movimientos políticos que pudieran afectar los intereses económicos de los monopolios y las empresas norteamericanas y eliminar la influencia comunista en la región, garantizando la prevalencia de los gobiernos satélites de Estados Unidos, articulando el continente a la disputa global entre el campo socialista y el capitalista, durante la *guerra fría*.

Como efectos de la guerra fría muchos gobiernos democráticos de la región fueron fichas de un juego en la disputa geopolítica entre los dos grandes bloques de poder, el socialista y el capitalista, y fueron derrocados por golpes de Estado o dictaduras militares como en Guatemala, Jacobo Arbenz, presidente elegido democráticamente y derrocado por un golpe de Estado (1954); en Brasil João Goulart (1964); en Bolivia, Víctor Paz Estenssoro; en Chile el golpe que encabezó Pinochet contra Salvador Allende (1973); en Uruguay se impuso una dictadura entre civiles y militares en 1973; en Argentina fue una junta militar la que dio el golpe de Estado contra Isabel de Perón en 1976.

Con las dictaduras militares se desató un período de represión, asesinatos, desparecidos y secuestros de opositores, líderes, activistas de izquierda y comunistas en el cono sur, inicialmente, que luego se extendió a todo el continente a través del Plan Cóndor, una estrategia que utilizó el terrorismo de Estado, a través de la coordinación entre los servicios de inteligencia de las dictaduras de dichos países, apoyada y financiada por la CIA.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, se trataba de "un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del 70 hasta iniciados los años 80 para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña"[22].

En resumen, la ola represiva que se desató en el continente y cerró las vías legales para acceder al poder, le dieron razón a la tesis que sostenía que la lucha armada era la única alternativa que tenían los

pueblos para enfrentar la injerencia y el tutelaje de la soberanía por parte del imperialismo; no quedó otra vía diferente a armarse y luchar contra la alianza opresora y fascista que se había conformado entre las burguesías nacionales, las juntas militares y los intereses de la potencia extranjera.

Dentro de este contexto, se puede afirmar que Colombia no fue ajena a la ola de luchas y movimientos insurgentes que se dieron durante la década del 60 en el continente. Sin embargo, habría que señalar que las particularidades con que se desarrolló y surgió en el país, fueron distintas y donde la masacre de las bananeras podría considerarse como el primer acto represivo y crimen de Estado del siglo XX, hecho que daría inicio a un largo ciclo de luchas y represión.

Luego vino el desarrollo de las luchas que llevaron a la agudización de las contradicciones sociales, hasta crear las condiciones para la resistencia campesina y urbana, que desembocaron en una intensa disputa por el poder entre las élites liberal y conservadora que llegó a su culmen con el asesinato del dirigente popular liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, frustrando una posibilidad de cambio en el país, hecho significativo que marcó como ningún otro la historia reciente de Colombia lanzándola a la vorágine de la confrontación.

3. El primer armisticio durante las guerras de Independencia

Los antecedentes de las guerras civiles en el país se hayan en las gestas de Independencia de las primeras décadas del siglo XIX. A partir de la derrota de los ejércitos realistas por las fuerzas patriotas comandadas por los *criollos*, se firmó el primer armisticio conocido al que se llegó tras un terrible baño de sangre provocado por el ejército "pacificador" comandado por el general español Pablo Morillo. Tras casi ocho años de duras y cruentas batallas, Morillo recibió la orden de la *conciliación fraternal* con los ejércitos sublevados de América, para poner fin a una guerra que estaba acabando con las finanzas de la monarquía.

El general español convino el fin de la guerra con los ejércitos patriotas que reclamaban de España el reconocimiento de la "República Independiente, bases únicas sobre las cuales puede tratar el gobierno de Colombia con el español", como lo expresó Bolívar en carta dirigida a Morillo[23]. Pero mientras España ofrecía "constitución y paz", los patriotas reclamaban "paz e independencia"[24]. Finalmente, terminaron siendo las tres cosas, Independencia, Constitución y paz, aunque el tiempo de esta última iba a ser realmente corto.

El armisticio que culminó las guerras de Independencia se firmó el 26 de noviembre de 1820 en Venezuela. Sin embargo, como se puede constatar con el estudio de la historia, la Independencia de las colonias

americanas no significó una verdadera estabilidad y seguridad para las nuevas repúblicas que surgieron de aquellas trágicas y heroicas gestas fundadoras de naciones, sino un convulsionado periodo de continuas disputas internas a lo largo del siglo XIX entre las facciones criollas que sobrevivieron a las guerras y amasaron fortuna, poder y gloria.

Las guerras civiles después de la Colonia del siglo XIX como desenlace de las contradicciones entre las facciones que preservaron estatus y poder tras las guerras de Independencia, han jugado un papel determinante en las relaciones de poder y la existencia de los conflictos bélicos en la historia del país.

Guerras civiles que han cortado como un bisturí en lo profundo del tejido social a lo largo de la historia republicana, causando una tragedia humanitaria tan descomunal que fue imposible ocultar, pero que también afectaron y condicionaron la forma de ser de varias generaciones; hasta el punto que las causas que les dieron origen no han desaparecido así se hayan transformado, como en el caso de la tenencia, usufructo y propiedad de la tierra a partir de la organización del territorio, un problema que ha sido prácticamente resuelto en casi todo el continente.

4. El reformismo constitucional y el problema de la tierra

El conflicto armado interno se ha nutrido de cada crisis social, cultural, religiosa, económica y política desde que se fundaron las repúblicas. La consolidación de éstas y la lucha interna por el dominio del Estado entre los sectores sociales que heredaron poder permitió una serie de levantamientos armados y enturbió el proceso de formación de la República, proceso ligado a proclamas y disputas por cambios en la dirección y administración del Estado, el modelo económico, la tenencia de la tierra, las relaciones con la iglesia y las relaciones internacionales, procesos y conflictos internos que generalmente finalizaban con reformas constitucionales.

El *reformismo constitucional* es una herramienta que la clase dominante ha utilizado tras el fin de cada guerra civil, para legitimar su poder. Es lo que el constitucionalista Hernando Valencia Villa (2010), en el libro Cartas de Batalla, describe como, "una estrategia ideológica preventiva del cambio social y generadora del consenso político que distingue al régimen colombiano desde hace casi doscientos años", (p. 17). Estrategia ideológica que permitió derogar la constitución centralista, confesionalista y presidencialista de 1886, que en el siglo XIX tuvo como abanderado a Rafael Núñez, quien había suprimido la constitución *federalista* de Rionegro (1863). Pugna entre facciones que definió el carácter de las luchas entre federalistas y centralistas

No obstante, la utilización del *reformismo* como *estrategia preventiva del cambio* los conflictos sociales y la violencia armada siguieron siendo parte de la vida social y política en las últimas cinco décadas, y un factor determinante de las constantes tensiones políticas. Aunque también hay que reconocer que dichas contradicciones y disputas, por otra parte, ayudaron a impulsar las reformas en el campo de los derechos fundamentales, en los servicios públicos y normas internacionales que se acogieron en el ordenamiento interno, como la lucha *antiterrorista* (Valencia, 2010, p. 17).

Para pactar treguas y amnistías, la élite política firmó acuerdos de paz con distintas insurgencias en los años 80s y 90s propiciando la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Nueva Constitución de 1991 y derogó la centenaria Constitución de 1886.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el desarrollo capitalista que tuvo Colombia durante el siglo XX se caracterizó por una incipiente modernización e industrialización basada en la acumulación permitida por el latifundio del monocultivo cafetero, bananero y la extracción minera, lo cual implicó una transición tortuosa de una sociedad esencialmente rural a una aceleradamente urbana.

A partir de estos cambios, la "república señorial" descrita por Antonio García, *Colombia: esquema de una república señorial* (1977), es la que dio paso a una sociedad más moderna, mientras se consolidaba una clase dominante compuesta por descendientes de familias de algunos patriotas y generales que lucharon en las guerras de Independencia (p. 121).

Como se afirmó, el conflicto alrededor de la tierra tiene sus orígenes en la misma Independencia, que facilitó la repartición y organización de feudos a los caudillos criollos que participaron en la campaña independentista, quienes luego consolidaron su poder económico y político en sus lugares de origen, ejerciendo el control de ejércitos privados que organizaron para su protección y la defensa de sus propiedades, dando origen al terrateniente o latifundista, al gamonal o

cacique regional, y al antecedente de lo que desde mediados del siglo XX hasta hoy se conoce como paramilitarismo; ejércitos mercenarios aliados de los ejércitos oficiales que continuaron con el proceso de apropiación de grandes baldíos, expropiaciones a pequeños y medianos campesinos, comunidades afro y pueblos originarios, sin dejar de servir a los intereses de los latifundistas.

De tal forma que quienes menos se favorecieron de la Independencia en cuanto a la propiedad de la tierra para su beneficio, fueron las comunidades pobres del campo, como resultado del largo proceso de exclusión, expropiación, desplazamiento forzado y desposesión que incluso sigue vigente.

De hecho este fue uno de los temas urgentes que pretendió aliviar el acuerdo de paz de La Habana, a través de la *Reforma Rural Integral*, pero que ha sido obstruido y saboteado en el Congreso por las fuerzas mayoritarias en contra del *Acuerdo final*, porque según ellos afectaría sus intereses sobre la gran propiedad de la tierra.

5. El origen de la violencia política

La huelga de los obreros bananeros en Ciénaga, Magdalena, entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 por mejores condiciones laborales, salariales y contra la insalubridad en que trabajaban para la United Fruit Company contribuyó, aunque con un alto costo humano, al declive de la hegemonía conservadora en el país, marcando un quiebre en la confrontación obrero-patronal en la historia de las luchas obreras del país. La respuesta del presidente Abadía Méndez (1926-1930) y su ministro de guerra (Carlos Cortés Vargas), ante el reclamo de los obreros bananeros fue ametrallar y masacrar a los trabajadores causando miles de muertos.

Durante los años cuarenta la violencia escaló rápidamente y adquirió características de barbarie, trasladándose del campo a la ciudad luego del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril del 1948, desatando con el *Bogotazo* la furia popular espontanea más grande del siglo XX.

Con el magnicidio de Gaitán, la burguesía bipartidista liberal-conservadora creyó haber liquidado la esperanza de cambio en Colombia. A 70 años de aquellos disparos direccionados, vale la pena preguntarse si realmente lo consiguieron o si lo que lograron fue profundizar más las contradicciones políticas y la guerra. Porque independientemente de quién haya disparado, el crimen de Gaitán tuvo como autoría el odio hacia los pobres y el discurso intransigente de la derecha conservadora con la anuencia de los jefes del partido liberal.

Odio que aún no ha sido superado y que al parecer tardará otra generación más en hacerlo, por lo que está indicando la cerrada oposición a un real y legítimo acuerdo de paz.

La reacción del pueblo, de las bases liberales gaitanistas, a la eliminación física del líder popular, desató, por un lado, un levantamiento violento y espontáneo que empezó con el *Bogotazo* y luego se convirtió en una insurrección armada de campesinos, principalmente liberales, que leyeron en la muerte del dirigente popular la frustración a sus más sentidas aspiraciones de cambio. Y por el otro, evidenció las oscuras intenciones de los sectores más conservadores, católicos y anticomunistas que representaban Mariano Ospina (1946-1950) y Laureano Gómez (1950-1951), el emulador de Franco con quien el país pasó de la dictadura civil anticomunista y corporativista, a la dictadura militar con el golpe del general Rojas Pinilla en 1953.

Ante la grave crisis y los focos de guerra que se formaron por todo el país, la oligarquía bipartidista sacó del sombrero del mago la propuesta del Frente Nacional como solución a la grave crisis y amenaza de guerra civil generalizada. Lo que buscaban con esta propuesta, era hacer un pacto de élites, las mismas que se presentaban ante el pueblo "supuestamente" divididas y enfrentadas, acuerdo que suscribieron en la España franquista de la que era un seguidor confeso Laureano Gómez y otros de su círculo más cercano.

El Frente Nacional, votado en el plebiscito de 1957, acordó la "pacificación" del país y repartirse el poder político y burocrático de forma alterna (1958 – 1974) entre liberales y conservadores, expresando su carácter clasista, elitista y excluyente dejando por fuera la oposición y la representación popular. Solo hacía falta completar la tarea de pacificar y estabilizar un país en medio de una peligrosa agitación que combinaba rasgos de guerra civil, caos y desinstitucionalización producto de la violencia promovida desde las "alturas", su sectarismo, odio de clase y dogmatismo religioso.

En resumen, el Frente Nacional no resolvió de fondo los problemas del país, por el contrario, los agudizó en la medida que el pacto por

arriba que se construyó negó y excluyó del derecho de participación política a la mayor parte de la población, dejando el problema de la democracia, la reforma agraria y los derechos laborales sin solución, y en el mejor de los casos en manos de la dictadura que venía en camino para que los enfrentara.

6. Rojas Pinilla y su promesa de Paz, Justicia y Libertad

Cinco años y 300.000 muertos después del magnicidio de Gaitán, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957), instaurada como el salvavidas de la clase dominante y el bipartidismo, acordó el armisticio y la desmovilización de las guerrillas liberales en septiembre de 1953, teniendo como uno de sus principales objetivos pacificar el país incendiado que le habían dejado quienes allí lo instalaron.

Entre las misiones de Rojas Pinilla estaba la de hacer el favor de poner fin a la guerra civil disfrazada como una guerra de exterminio entre liberales y conservadores, los últimos apoyados por civiles y la policía conservadora, los llamados chulavitas. No obstante, el dictador con su cosmético y desmovilizador lema de *Paz, Justicia y Libertad* consiguió detener por un tiempo la guerra civil que empezaba a extenderse a todo el país.

Pero la firma del armisticio y la desmovilización de 30 mil guerrilleros liberales del Llano no significó la paz sino la eliminación paulatina de los jefes guerrilleros Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure y Hermógenes Vargas, entre otros, quienes una vez desarmados y confiados en la palabra del dictador, fueron asesinados uno a uno por fuerzas oficiales y paraestatales.

Son los años en que se institucionaliza la política de la eliminación y el exterminio del opositor, que se convirtió en adelante en la estrategia

contrainsurgente del Estado y en uno de los principales obstáculos para conseguir la paz y la reconciliación en Colombia; naturalizando la acción criminal del Estado, a tal punto que tras cada acuerdo de paz, desmovilizaciones guerrilleras, amnistías e indultos, quienes los suscribían y se comprometían eran paulatina o masivamente exterminados como sucedió con la Unión Patriótica (UP).

Al final de cuentas, la desmovilización, amnistía y promesas de paz de 1953, solo sirvió para dar inicio a un nuevo ciclo de lucha armada en el país con el surgimiento de las guerrillas comunistas, marxistas y socialistas durante los años 60s.

7. Belisario Betancur: pura paja y pum, pum, pum

Los grupos insurgentes que surgieron en los años 60s con un nuevo carácter y objetivos estratégicos a largo plazo, diferenciándose de las guerrillas liberales del Llano, iniciaron una nueva fase de confrontación armada que duró hasta mediados de los años 80s, cuando aceptaron abrir un ciclo de diálogos de paz y negociación con el presidente de entonces, Belisario Betancur (1982-1986).

Belisario Betancur abrió, en efecto, el camino del diálogo con unas guerrillas (FARC, ELN, EPL, M-19) fortalecidas nacionalmente y convertidas en un serio desafío al poder de la oligarquía bipartidista y al monopolio de la fuerza del Estado, además de ser una amenaza a los intereses de Estados Unidos en el país.

Para la clase gobernante se estaban presentando tres situaciones que de concurrir en un escenario único, pondría su poder en serios aprietos: de un lado, unas guerrillas fortalecidas significaban mayor amenaza, no solo en el campo donde históricamente se había desenvuelto la guerra, sino también en las ciudades a donde habían llegado (como el M-19); del otro, las condiciones sociales y económicas de pobreza, desempleo y miseria favorecían el crecimiento de estas y de las organizaciones políticas de izquierda; y, finalmente, la economía del narcotráfico que había irrumpido violentamente a través de poderosos carteles, agrandando la crisis y haciendo más complejo su manejo.

Este análisis quedaría incompleto si se desconoce el papel que ha desempeñado el narcotráfico en el conflicto armado, el impacto que ha tenido en la sociedad y en varias generaciones, al punto de llevar a algunos a hablar de "cultura" del narcotráfico. Pues está ampliamente documentado, que las mafias del narcotráfico han mantenido relaciones directas, unas veces, soterradas otras, con los poderes hegemónicos tradicionales, relaciones de las que se beneficiaron mutuamente. Así mismo, las guerrillas se sirvieron del narcotráfico para financiar la guerra que han librado contra el Estado, cobrando por los cultivos y la producción de narcóticos, en lo que se conoce como el impuesto al gramaje.[25]

Inmerso en una profunda crisis de legitimidad, está ampliamente documentado, también, que el Estado hizo alianzas con las estructuras del narcotráfico y las utilizó para eliminar la oposición política, mercenarizando el conflicto social y armado. Así fue como respondió a la protesta y reclamo que desde los diferentes movimientos sociales y ciudadanos que no estaban comprometidos con la lucha armada, para que realizara cambios de fondo para superar la grave crisis social y convulsión política.

Crisis que propició las condiciones para los acuerdos de paz en 1984 entre las guerrillas M-19, EPL y las FARC, y el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986). Acuerdos que, como es sabido, tampoco prosperaron porque encontraron poderosos enemigos dentro del Estado, las Fuerzas Armadas y el empresariado, los llamados *enemigos agazapados de la paz* que se opusieron a estos como lo denunció en su momento el Comisionado de Paz, Otto Morales Benítez.[26]

En medio de la violencia y la crisis que caracterizó la década de los 80s nacen la UP, el Frente Popular y A Luchar, organizaciones de base popular comprometidas en impulsar una apertura democrática con el objetivo de cambiar la realidad social y política del país. Pero aquella legítima intensión se estrelló contra el poder de un Estado históricamente violento y cerrado, que ha funcionado de dos formas: por medio del terrorismo de Estado para aniquilar la oposición que le hacían

las organizaciones populares; y reeligiéndose en elecciones “libres y democráticas”, en lo que se conoce como la democracia formal que la oposición y la izquierda siempre cuestionaron.

El acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las guerrillas fracasaron porque lo “torpedearon” los poderosos enemigos que esta tenía dentro y fuera del gobierno, tal y como lo denunció Otto Morales, lo cual significó el exterminio de la oposición representada en las organizaciones populares y partidos políticos que apostaron por la solución política del conflicto social y armado. Hoy ya no es común usar el verbo *torpedear*, es más apropiado decir *hacer trizas*, aunque el propósito sea el mismo, impedir que prospere cualquier acuerdo de paz.

8. César Gaviria y su jugada maquiavélica

Los 90s fueron los de la gran mentira de Gaviria cuando inauguró la década con su rebuscada frase: *Bienvenidos al futuro*. Fue un período caracterizado por la intensificación del conflicto armado, a pesar de que en el campo internacional finalizaba la Guerra fría. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó, así lo divulgó la propaganda vulgar, el final del socialismo real de la Unión Soviética y de Europa del Este. Las tesis del *Fin de la historia y el último hombre* del filósofo norteamericano Francis Fukuyama (1992) vaticinaron el fin de la lucha de clases, así como un futuro próspero basado en una sociedad que había alcanzado su máximo desarrollo en el modelo de Estado capitalista liberal. Pero también fue la década de la guerra de los carteles del narcotráfico contra el Estado, los movimientos populares y la sociedad.

Como una demostración de hasta dónde había llegado la vieja usanza de eliminar al adversario político, baste recordar que, en un solo año, 1990, fueron asesinados tres candidatos presidenciales: Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica; Carlos Pizarro del M-19 y Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo. Sin embargo, se pudo volver a hablar de paz en medio de la inmensa tragedia humanitaria que, de acuerdo con el Centro Nacional de la Memoria Histórica (2013), entre 1958 y 2012 produjo 220.000 muertes violentas, 25.000 desaparecidos/as y 5 millones de desplazados.

Con el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) guerrillas como el M-19, EPL, Quintín Lame y PRT alcanzaron un acuerdo que les permitió deponer las armas y desmovilizarse, facilitando que una mayoría de sus integrantes se reincorporaran, pero también que otra fuera cooptada por el Estado como parte de la guerra que éste adelantaba contra las que no se acogieron al acuerdo, las FARC y ELN. Desatando una ofensiva y represión oficial no sólo contra las guerrillas que no se acogieron a su propuesta de desmovilización, y contra los movimientos y organizaciones de izquierda y de oposición que no estaban comprometidas con la lucha armada, aumentando aún más el número de víctimas y la tragedia humanitaria.

La gran jugada maquiavélica de Cesar Gaviria consistió en dividir la negociación: unas guerrillas participarían de los diálogos, las que se mencionan arriba, obtendrían amnistía e indulto y una vez reinsertadas quedarían habilitadas para participar en política, pero con las dos últimas no buscó acuerdos si no que las conminó a aceptar las condiciones de la negociación que proponía unilateralmente su gobierno, y al estas no ver una posibilidad real de paz se negaron a aceptar la falaz propuesta de diálogo, lo cual le permitió al gobierno justificar la ofensiva militar que lanzó.

Ese fue el contexto bajo el cual se convocó la *Asamblea Nacional Constituyente* en febrero de 1991 y así fue como vino al mundo la nueva Carta Constitucional que hoy nos rige. Valdría preguntarse, al quedar por fuera de aquel proceso y de los acuerdos dos guerrillas como las FARC y el ELN, ¿cómo podría la nueva Constitución cumplir con su principal razón de ser, el mandato supremo de la paz? Solo a medias, como en efecto sucedió, y por esa misma razón siempre fue una paz incompleta, tan indeseable como la continuación de la guerra.

9. San Vicente del Caguán y el Plan Colombia

Tras otra montaña de muertos y un país en medio de una profunda crisis, una nueva mesa de diálogos se inició entre Andrés Pastrana (1998- 2002) y las FARC, que llevaron a otro acuerdo de paz. Este acuerdo se consiguió a partir de los diálogos de San Vicente del Caguán, municipio del departamento del Meta, que devolvieron la esperanza de que era posible la solución política del conflicto social y armado. Pero esta nueva oportunidad volvió a quedar truncada como se verá.

Por una parte, las FARC se encontraban en su época dorada y en una franca consolidación y expansión militar, no exenta de cierto triunfalismo y prepotencia; y por la otra, un Estado debilitado política y militarmente, desesperadamente necesitado de una nueva estrategia o *Plan* que lo sacara del atolladero en que se encontraba. *Plan* que en efecto se diseñó con asesoría y apoyo directo de la CIA y el Pentágono para fortalecer la fuerza pública (ejército, policía y órganos de inteligencia), y relanzar la estrategia contrainsurgente usando el paramilitarismo como punta de lanza para contrarrestar el avance y el desafío de las guerrillas.

Una mirada crítica al proceso de diálogos del Caguán tendría que tener en cuenta las principales razones que llevaron a su fracaso. Por una parte, la exigencia de la guerrilla de que el Estado desmontara el paramilitarismo, lo cual este no iba a hacer puesto que era parte de su

estrategia y la de sus asesores norteamericanos para recuperar el terreno y el tiempo perdido.

Por la otra, la implementación del *Plan Colombia*, una estrategia integral contrainsurgente presentada como un plan antidrogas, diseñado en el Pentágono con el fin de fortalecer y reestructurar las Fuerzas Armadas colombianas para contrarrestar el avance militar que habían desatado las guerrillas en todo el país. La negativa del gobierno de Pastrana para desmontar el paramilitarismo evidenció la falta de voluntad real en la búsqueda de la paz, que se completó con el lanzamiento del Plan Colombia, demostrando con ello que se trataba de la vieja táctica de ganar tiempo para enfrentar en mejores condiciones al enemigo.

Y finalmente, la táctica de las FARC de mantener sus operaciones y ofensiva en las regiones que estaban por fuera de la zona de distensión, manteniendo un clima de enfrentamiento militar que como era obvio, fue respondido por las fuerzas armadas del Estado.

Como fue reconocido después, el objetivo del gobierno de Andrés Pastrana no era alcanzar la paz, sino fortalecer las Fuerzas Armadas para recuperar el terreno perdido por la ofensiva sostenida de la guerrilla desde la década anterior a los diálogos del Caguán[27]. Así fue como se perdió la cuarta oportunidad de lograr el fin del conflicto armado.

10. El gobierno de Álvaro Uribe: la tragedia humanitaria llevada al paroxismo

Alvaro Uribe ganó la presidencia (2002-2010) con la promesa de derrotar las guerrillas y por eso las equiparó con organizaciones terroristas, aprovechando el "buen" ambiente creado por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a partir de la llamada *Justicia Infinita* u *Operación Libertad Duradera*, con la cual ordenó atacar a los países del *eje del mal* que apoyaban el terrorismo islamista, principalmente a Irak, Afganistán e Irán que a juicio del imperio estuvieron detrás del ataque terrorista a las Torres Gemelas de New York, el 11 de septiembre del 2001.

Para demostrarle que lo esperaban para confrontarlo militarmente, las FARC lo recibieron lanzándole cohetes artesanales y explosivos el día de su posesión como presidente en el palacio de Nariño.

Ni cabía la menor duda que Uribe iba a aprovechar el Plan Colombia que le había dejado montado su antecesor, Andrés Pastrana, luego de la ruptura de los diálogos del Caguán en el 2002.

En efecto, a partir de ahí, lanzó su principal estrategia de guerra camuflada en la llamada *Seguridad democrática*, la principal bandera de su gobierno.

Sus objetivos eran acabar con el secuestro, las vacunas y toda clase de tropelías y atentados contra la infraestructura petrolera, puentes,

alumbrado eléctrico, ataques a bases militares y pueblos que llevaba a cabo la guerrilla y que habían aumentado considerablemente.

Para ello había que empezar despejando las carreteras para salir a pasear y visitar las fincas; seguidamente asegurarle al gran capital y las trasnacionales un país en paz para la inversión de capitales, y luego lograr la cohesión social. Era sin duda, una estrategia de guerra bien diseñada.

No obstante, antes de llegar a la presidencia contaba con una larga carrera como alto funcionario del Estado y que empezó desde que era muy joven.

Había ejercido los cargos de director de la Aeronáutica Civil en 1980-82, donde entre otras cosas se le señala de conceder licencias de vuelo a Pablo Escobar, el jefe del *Cartel de Medellín*, una de las principales y más poderosas organizaciones criminales del narcotráfico.

También fue alcalde de Medellín (1982), cargo al que tuvo que renunciar a los pocos meses por pedido del presidente Belisario Betancur al gobernador de ese entonces, Álvaro Villegas, ante denuncias de nexos con el *Cartel de Medellín*.[28]

Posteriormente fue senador de la República entre 1986-1994, donde impulsó la reforma a la Seguridad Social (Ley 100 de 1993) que modificó el Sistema Nacional de Salud, mercantilizando un derecho fundamental como la salud, entregándola a empresas intermediadoras como las EPS (empresas promotoras de salud) y ARS (aseguradoras del régimen subsidiado) que han quebrado el sistema ocasionando una grave crisis que sigue sin solución.

Así mismo, fue ponente de la reforma laboral (Ley 50 de 1990) que arrebató derechos de los trabajadores como la estabilidad laboral, las horas extras, suprimió la retroactividad en el pago de las cesantías, abrió las puertas a la tercerización laboral. En pocas palabras, impulsó reformas en el Congreso en favor de la patronal y el gran capital trasnacional; al tiempo que pauperizó los salarios de los trabajadores que vieron desaparecer como por arte de magia sus derechos y conquistas laborales.

Ejerció también el cargo de gobernador (1995-1997), desde donde apoyó e impulsó las *Convivir*, primeras organizaciones armadas de civiles reconocidas por el Estado y creadas en el gobierno de César Gaviria (1990-1994) a través del Decreto-Ley 356 de 1994.

Su mandato se basó en estas premisas: combatir el terrorismo a través del Plan Colombia, pero para ello tuvo que imponer la visión de que en Colombia no había conflicto armado ni interno, porque aceptarlo sería reconocer y legitimar a las guerrillas, que para él no eran más que una banda de "terroristas" que le estaban haciendo la guerra a Colombia y a la democracia y esa era la prueba de que no tenían legitimidad como alzados en armas o como grupos insurgentes que ejercían el derecho a la rebelión armada; esta tesis la sustentó y defendió en una sociedad donde el Estado venía haciendo uso sistemático del terrorismo de Estado y de la eliminación del adversario u opositor político, como se ha argumentado a lo largo del ensayo.

No cabe duda que durante su mandato como presidente logró unir al país contra las guerrillas y lo polarizó a un nivel nunca antes visto, con la excepción de la época de La Violencia que desató el asesinato de Gaitán.

Logrando construir un consenso mayoritario que incluía poner las instituciones, las iglesias, los gremios económicos, las Fuerzas Armadas y de policía, los grandes latifundistas, los grandes medios de comunicación y Estados Unidos como potencia aliada, al frente de su campaña bélica contra el enemigo terrorista.

Durante su gobierno fue cuando más se asesinó a civiles, presentándolos como integrantes de la guerrilla, en lo que se conoce como falsos positivos o muertes fuera de combate. Se calcula, según un estudio reciente, que pueden haber sido más de diez mil los asesinatos. [29]

Los dos períodos de su gobierno, es mejor repetirlo, incrementaron más que ningún otro en la historia reciente de Colombia el asesinato de líderes políticos de oposición y de izquierda, defensores de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, líderes afros e indígenas sin contar

los miles que hizo encarcelar desde que lanzó su programa de la red de informantes pagos en el país, Latinoamérica y Europa, a través de sus embajadas.

No cabe duda que le tocó asumir el poder en un momento en que Colombia no era un país viable y se encontraba en medio de un caos y un conflicto que llevó a que se discutiera si era un país *fallido*, y además de eso, la guerra que hicieron las guerrillas destruyendo pueblos y la infraestructura económica, profundizó la crisis social, política y económica aún más.

Es el expresidente que más expedientes y acusaciones tiene ante los tribunales y la justicia. Según el portal Kien y Ke, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cursan 261 procesos en su contra.

Muchos de los testigos que lo señalaban de haber apoyado e impulsado grupos paramilitares han sido asesinados; son bien conocidos los altos funcionarios que trabajaron en su gobierno que están o han estado en la cárcel por delitos graves; el caso del DAS y sus directores acusados de perseguir, *chuzar* las llamadas e incluso dar la orden de asesinar opositores ha sido uno de los más conocidos; aparte de los escándalos de altos funcionarios incluido ministros condenados por corrupción como Andrés Felipe Arias, por el caso *Agro Ingreso Seguro*; o como el fraude y cohecho para la reelección que llevó a la cárcel a varios de sus ministros en el conocido escándalo de la Yidis Política.

Sobre los acuerdos de "paz" que hizo con las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC) entre el 2003, tras el *Acuerdo de Santa Fe de Ralito*, y el 2008, en que fueron extraditados los principales jefes paramilitares, varios de estos (Mancuso y Don Berna), lo han acusado de haberlos enviado a las cárceles de Estados Unidos llevando los crímenes de lesa humanidad a un nivel de impunidad nunca antes conocido, para que no contaran lo que había detrás de la estrategia paramilitar y las horrendas masacres que cometieron en todo el país.

Estrategia paramilitar que contó con el apoyo, acompañamiento y asesoría de militares extranjeros, el ejército nacional, la policía y las

agencias de inteligencia, en una espantosa cruzada anticomunista que pasaba por sacar a la fuerza, lo que se conoce como desplazamiento forzado, a millones de familias campesinas que tuvieron que dejar sus casas, pertenencias y parcelas de tierra que pasaron a engrosar la de los grandes terratenientes y nuevos ricos que se hicieron a millones de hectáreas de tierra a punta de masacres, motosierras y terror.

Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dio la orden a su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, de bombardear un campamento de las FARC en Ecuador violando la soberanía del vecino país, en el 2008, donde murió Raúl Reyes, uno de los máximos comandantes de esta guerrilla.

El de Álvaro Uribe nunca fue un gobierno para la paz sino para la guerra, que adornó con sus cacareados tres huevitos: *la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social*, que no fueron más que los componentes espurios de una estrategia de guerra que costó la vida de miles de colombianos; haciéndole creer, además, a más de medio país que de lo que se trataba era de poder viajar por carretera a la finca, una vez estas fueron despejadas de terroristas.

Desde que llegó a la presidencia en el 2002 con el 53% de los votos, su influencia en la vida política, la economía y la nación no ha parado, aunque hoy es evidente su desgaste.

11. El acuerdo de La Habana para la terminación del conflicto armado

Los diálogos para acordar el fin de la guerra por medio de un acuerdo se dieron con el presidente y en el momento que Colombia menos se lo esperaba.

De hecho, Santos mismo sorprendió supuestamente a su ex jefe, Álvaro Uribe, cuando luego de que este lo avalara como candidato presidencial, se le volteó según aquel, y empezó a explorar el camino de los diálogos de paz con las FARC, traicionando a su anterior comandante en jefe cuando empezó a reconocer que en Colombia sí había un conflicto armado interno.

En la segunda década del siglo XXI, la creencia general de que la gente estaba hastiada de la guerra y la violencia no parece cierta. Porque si bien es cierto entre los diálogos del Caguán y los de La Habana la tragedia humanitaria aumentó, como era de esperarse, también lo era que *Los diálogos de La Habana* que se inauguraron en el 2012, iban "supuestamente" a devolver la esperanza de paz a Colombia.

Pero los diálogos empezaron mal. La estrategia de Santos y la cúpula militar era llegar a la mesa en mejores condiciones de fuerza y legitimidad, y para ello fue que hicieron las operaciones de aniquilación y asesinato de los altos dirigentes del secretariado de las FARC. Esas operaciones militares ya habían dado frutos (el Negro Acacio, Martín Caballero, Raúl Reyes, el Mono Jojoy) desde que la maquinaria de

guerra del Estado se fortaleció y dotó de tecnología de punta, a través del *Plan Colombia*.

El "último" golpe en el marco de la estrategia de Santos y sus asesores para llegar ventajosamente a la mesa y someter su contrario, fue dar de baja al máximo comandante del secretariado, Alfonso Cano, el 4 de noviembre del 2011, en Suarez, Cauca, incluso pudiendo capturarlo, como lo ha sostenido el arzobispo de Cali Darío Monsalve quien se atrevió a desafiar la versión oficial, cuando afirmó que a Cano le aplicaron la pena de muerte.[30]

Eran conscientes de que los acercamientos que se estaban dando entre las partes se podrían romper y fracasar, ya que sin duda ese golpe a la cabeza de esta guerrilla iba a ser demoledor, además del mensaje en vía doble que les enviaba.

Diálogo y acuerdo por encima del cadáver de su máximo comandante o someterse a una guerra de exterminio, condición que para quien conoce bien la historia de Colombia podría ponerse en duda, ya que la experiencia lo que ha demostrado es que a una guerrilla tal vez se la pueda derrotar, pero es menos probable que se la pueda exterminar.

Sobre el asesinato a mansalva de Cano se ha escrito y especulado mucho, pero lo que si no cabe poner en duda es que su efecto en las FARC tuvo varias consecuencias.

Una es que aceptaron dialogar con la cabeza de su máximo líder servida en bandeja de plata, y la segunda es que eran conscientes de que eso iba a producir un remesón y cambio obligatorio en la dirección de las FARC, como en efecto se produjo y ese es el contexto en que es elegido como máximo comandante Timoleón Jiménez, Timochenko.

Es probable que Cano hubiera sido el punto de encuentro y consenso entre las dos tendencias que se disputaron los contenidos, proyección y futuro de lo que sería en adelante las FARC tras la negociación.

Sin duda, eran evidentes el desgaste y los efectos devastadores en todos los ámbitos de la sociedad en más de cinco décadas de conflicto armado; como también lo era la decisión y la voluntad política de las partes para firmar el acuerdo y descartar el uso de las armas en la

política, tal y como lo expresa el *Acuerdo Final* y como lo han cumplido las FARC al pie de la letra.

En ese sentido, los diálogos para la *terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera* habrían sido el hecho más significativo y trascendental de la última década con consecuencias a corto, mediano y largo plazo para el país y para la región, dependiendo de si llegaban a buen término o fracasaban, como evidentemente está ocurriendo, confirmando la tesis de que la sociedad colombiana en realidad no está preparada para asumir el acuerdo de paz.

El impacto que produjo el *Acuerdo Final* sobre la coyuntura que vive el país, plantea interrogantes de un alcance no dimensionado antes: ¿sería posible esta vez transitar del conflicto armado a la lucha política legal por el poder en Colombia? ¿Qué responsabilidad le compete a cada uno de los actores armados, a la clase dominante de un lado, a las guerrillas por el otro, en el esclarecimiento de la Verdad sobre lo ocurrido? ¿Cuáles han sido las causas históricas del largo conflicto armado? ¿Cuál ha sido el papel y responsabilidad de las instituciones estatales, los partidos políticos tradicionales, los grandes grupos empresariales, los grandes medios de comunicación, la iglesia y los altos prelados en el conflicto? ¿Podrá la sociedad colombiana esta vez, llevar a buen término los acuerdos e imponerse a las poderosas fuerzas que se oponen? ¿Estarán las organizaciones políticas y movimientos sociales a la altura del nuevo momento y apertura que se abre? ¿Qué posibilidad le compete a una Asamblea Nacional Constituyente como proceso de empoderamiento del constituyente primario, hacia la implementación y los cambios estructurales que necesita Colombia? ¿Se repetirá el exterminio de los líderes sociales y la oposición como en los anteriores fracasos? ¿No estaba la sociedad colombiana realmente preparada esta vez, para el acuerdo de paz e impedir su fracaso?

Está claro que el *Acuerdo Final* no se hizo para solucionar todos los problemas del país. Pues lo que se buscaba era, fundamentalmente, terminar con la confrontación interna a través de una solución política; que las guerrillas dejaran las armas e hicieran tránsito a una vida

normal; dignificar la vida de la población rural y urbana; garantizar los derechos de las víctimas; establecer un sistema de justica transicional, la Justicia Especial para la Paz; y la participación política bajo nuevas condiciones que permitan profundizar la democracia.

Si el *Acuerdo* hubiera conseguido el *fin del conflicto armado y una paz estable y duradera* como política de Estado, con la participación directa de una amplia mayoría de la sociedad y no como la proeza de un presidente y su gobierno, habría sido un logro histórico sin precedentes. De ahí que lo acordado no debería prestarse para generar falsas expectativas.

12. Qué no se negoció en La Habana

El modelo neoliberal, la doctrina económica de los gobiernos desde César Gaviria hasta hoy, convertida en dogma estatal, y que tiene que ver con las privatizaciones de bienes y riquezas públicas; con articulado en la Constitución del 1991 que legitima al Estado en asuntos como las privatizaciones, las riquezas del subsuelo, los monopolios, nada de esto se discutió en La Habana.

Los acuerdos de libre comercio, que han impactado negativamente la economía campesina y la producción agrícola de tal modo que puso en riesgo permanente la soberanía alimentaria de la nación; la superación de la pobreza extrema en que siguen viviendo millones de familias; la impunidad que sigue reinando en la Rama de justicia y que ha mantenido selectiva desde instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, las Cortes y el Ministerio de Justicia; el modelo de Estado y el régimen político; la economía extractivista o locomotora minero energética como la bautizó Santos; las relaciones internacionales y la soberanía nacional, ninguno de estos temas fue siquiera discutido, y los más seguro es que no lo serán en otra mesa de diálogos de paz. Es importante tenerlo presente para no generar ilusiones o un excesivo optimismo, con cualquier *Acuerdo* posterior que se firme.

Tampoco se negoció el régimen de partidos, ni el viciado y caduco sistema electoral, salvo alguna participación en este, y a pesar de las modificaciones que intentó introducir el acuerdo; no había motivo para

poner en discusión su modelo de Estado, como tampoco el modelo económico de acumulación de riquezas. ¿Por qué habría de hacerlo si no fue vencido, y además *los factores reales de poder* no se modificaron de manera sustancial? ¿Acaso antes de firmarse el *Acuerdo Final* no había fuerzas políticas y económicas haciéndole la oposición, que fue incrementándose y poniéndole trabas y obstáculos a partir de la campaña de miedo que involucró a los gremios económicos, las iglesias, los partidos tradicionales y los altos funcionarios e instituciones del Estado, como las altas Cortes, la rama judicial y el Congreso?

Si se mira las razones porqué estos temas no se trataron en la mesa de negociaciones, tendría que considerarse que lo acordado es producto de una confrontación armada que finalizó "supuestamente", sin vencidos ni vencedores.

13. Cumplir no importa que el otro incumpla

Cuando se iniciaron los diálogos de La Habana en el 2012, muy pocos creían que las FARC iban a dejar las armas, terminar con el secuestro, desenlistar menores de edad de sus filas, pedir perdón a la sociedad y a las víctimas por los crímenes y actos de terrorismo[31] que cometieron, terminar con la relación económica que mantenían con el narcotráfico, entregar los recursos que acumularon, concentrarse en las (ZVTN) Zonas Veredales Transitorias de Normalización; en resumen, muchos no creyeron que cumplirían con lo acordado.

No obstante, el movimiento social encabezado por Marcha Patriótica fue uno de los primeros en el país que desde el 2012 levantó la bandera de los diálogos de paz como una de sus principales reivindicaciones, convocando grandes movilizaciones en favor de los diálogos en todo el país, como la movilización de un millón de personas en Bogotá el 9 de abril del 2013, entre otras.

La decisión de cumplir con lo pactado por parte de las FARC, a pesar de la fuerte oposición de la extrema derecha, los obstáculos e incumplimientos del Estado, dejó sin argumentos aquellas fuerzas que negaron su naturaleza y objetivos políticos, pero eso no quiere decir que esas fuerzas no sigan siendo poderosas opositoras a cualquier intento por terminar el conflicto.

Basados en una matriz de opinión diseñada para influir en la opinión pública, distorsionando y tergiversando la realidad con mentiras y

falacias, dos reconocidos voceros de la extrema derecha, Fernando Londoño y Alejandro Ordóñez, prometieron *volver trizas* el acuerdo de paz. Por supuesto, lo dijeron cuidándose de no manchar la imagen de los sucesivos gobiernos que han hecho uso extensivo y sistemático del terrorismo de Estado en la violación de los Derechos Humanos.

Muy poco se ha cumplido de lo acordado. Las comunidades rurales más afectadas por el conflicto, como en el caso de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, siguen esperando que se las incluya en la participación política, ya que les arrebataron la posibilidad única de elegir sus propios representantes de base en el parlamento, quedando postergada de nuevo la participación política y la apertura democrática. Aparte de esto, los impedimentos de todo tipo para que el nuevo partido que surgió de las FARC pueda existir, han sido insuperables.

Muchos prisioneros de las FARC siguen en las cárceles; las Zonas Transitorias, hoy Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, están diezmados y los ex guerrilleros legalizados que allí quedan esperan que se les cumpla. Del punto sobre *Solución al problema de las drogas ilícitas*, que implica un acuerdo sobre erradicación y sustitución de cultivos de coca, el Estado solo ha priorizado la erradicación forzada pero no ha implementado los subsidios y créditos para las más de 70 mil familias que harán el tránsito de estos a productos agrícolas más acordes con sus necesidades y las de la economía productiva del país.

Las Víctimas siguen siendo las más damnificadas y las que menos han obtenido verdad, justicia, reparación y no repetición, por el contrario, se ha incrementado el asesinato y la eliminación de líderes sociales en todo el país durante y después de la firma de los acuerdos. De la Reforma Rural Integral, lo que se ha logrado es una lenta y casi inexistente devolución, legalización y titulación de predios expropiados o en litigio, y lo que en realidad está sucediendo es que están asesinando a los reclamantes legítimos de tierras por el llamado ejército antirestitución.

14. La derrota del proyecto histórico de las FARC

Esta afirmación no puede llevar a conclusiones apresuradas, porque es muy reciente el acuerdo y falta mucha tela por cortar. De hecho, lo primero que se tendría que considerar es si los acuerdos mismos fracasaron en esta primera fase, que es a lo que apunta la tesis de este ensayo, o si habría que esperar más tiempo para tener mejores elementos de juicio y evidencias más sólidas para arriesgarse a concluir si ante lo que se está es un fracaso de los acuerdos solamente o también ante la derrota del proyecto histórico de las FARC.

Hacer un análisis crítico sobre este trascendental asunto tiene que ver de alguna manera, así no sea un propósito explícito aquí, con el papel de las FARC en el largo conflicto armado. Un tema que encuentra enormes dificultades por obvias razones. No se trata pues de hacer una historia de las FARC, hay autorizados, amplios y pormenorizados estudios e investigaciones de todos los colores ideológicos sobre ellas.

En el caso de la JEP, un tribunal de justicia *ad hoc* que crearon los acuerdos para ayudar al esclarecimiento de la verdad, establecer las responsabilidades y participación de los civiles, paramilitares, agentes del Estado y guerrilleros en violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, y desde esos aportes voluntarios ayudar a hacer justicia y evitar la impunidad para darle un cierre definitivo al conflicto armado; aún no se tiene claro si este tribunal *ad hoc* contará

con el respaldo y legitimidad del nuevo Congreso y del presidente que asuma funciones, terminado el período de Juan Manuel Santos.

Otro problema son las fuentes. ¿Accederán los órganos de seguridad del Estado como el ejército, la policía, y agencias de seguridad a entregar los archivos con la información que tiene sobre la guerra en Colombia? ¿Tienen las FARC archivos sobre las acciones de guerra y tomas, víctimas de secuestros, cobros de impuestos, etc.? Otro problema es la extensión en el tiempo del conflicto y la diversidad de actores, gobiernos, generaciones involucradas en el mismo.

Aparte de ser una labor exigente, no exenta del sesgo ideológico y la postura política de quien lo haga. No es como podría pensarse que consultando los libros de historia bastaría, o que sería fácil seguir el desarrollo de los acontecimientos a la luz de lo que informen los grandes medios de comunicación o los "sesudos" análisis de los centros de pensamiento, que al final de cuentas viven de los fondos y ayudas de gobiernos extranjeros, de las grandes empresas y ONGs internacionales, que como bien se sabe adolecen de cualquier pretensión de neutralidad y objetividad, nada más ingenuo creer eso. Porque, ¿qué hay más ideologizado y politizado que una guerra o conflicto armado?

Dicho esto, que no está exento de sesgo ideológico y carga subjetiva, pues no se pretende ninguna neutralidad u objetividad, la relación de las FARC con el contexto histórico en que surgieron, las causas y motivaciones que las hicieron posibles y su posterior desarrollo hasta hoy, es un buen punto de partida.

Sin duda las FARC tienen su origen en las luchas agrarias y obreras contra la hegemonía oligárquica de liberales y conservadores, que determinaron la realidad social, política, histórica y militar sobre la cual surgieron en el siglo XX. Su historia está marcada por las resistencias campesinas y por las luchas obreras que se dieron desde finales de los años 20 del siglo pasado. Allí en ese entramado conflictivo y de cambios encontramos sus raíces. No es un anacronismo, entonces, decir que, si bien nacieron formalmente como FARC en 1964, su origen va más atrás incluso del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de

1948, hecho de consecuencias impredecibles que dividió la historia de Colombia en un antes y un después por la Violencia que como una hoguera consumió al país, y que aún no ha parado y sigue encendida a veces con mayor, a veces con menor intensidad.

Las FARC no surgieron como un partido comunista en el sentido clásico e histórico, sino como una guerrilla campesina que poco a poco y tras la influencia del partido comunista colombiano transitó a una guerrilla revolucionaria hasta convertirse en una de las más poderosas y de mayor influencia, sin que nunca perdiera su carácter marcadamente campesino ni su arraigo en el campo, así se haya nutrido de obreros, estudiantes, mujeres y simpatizantes procedentes de las ciudades.

Pero al sellar el acuerdo de paz hoy, tras los cuatro anteriores fracasos que no lograron desmovilizarlas ni desarmarlas, Juan Manuel Santos (2014-2018) sí lo logró, de hecho, su objetivo estratégico era desmovilizarlas y desarmarlas, como lo ha repetido cada vez que le dan la oportunidad.

Así las cosas, este sería el primer argumento de peso que apoya la tesis de que este proceso le arrebató a las FARC su proyecto histórico y las dejó en una situación de derrota estratégica. Sin embargo, haría falta agregar un análisis sobre la capacidad militar en que se encontraban al momento de iniciar los diálogos con Santos. ¿De declive, debilidad, repliegue o derrota? No es este el espacio para hacer ese análisis.

No se ha tenido en cuenta, tampoco, asuntos que tienen que ver con su carácter e historia como la federalización (frentes-regiones) a que habían llegado producto de su origen rural, ni los golpes que le asestó el enemigo durante la guerra reciente al desarrollar el componente del Plan Colombia y la tecnología militar de punta (bombas de precisión o guiadas), ni las divisiones y contradicciones internas acumuladas de largos años de guerra, hasta llevarlas a la situación en que se encuentran hoy convertidas en un partido incapaz de articular con sus bases urbanas, un movimiento bastante debilitado, fragmentado y dividido.

Ahora, dependiendo del grado de aceptación o rechazo social del *Acuerdo Final*, que como van las cosas arriesga más a terminar en un

fracaso que en un éxito, será el rumbo que tome tanto el proceso de paz, la coyuntura que se presente tras las elecciones presidenciales que sentarán las bases para un cambio o para que continúe el estado de cosas y su agudización. Cualquiera de los escenarios necesariamente terminará transformándolas a ellas mismas, como en efecto está sucediendo.

La idea de un partido unido y cohesionado que daba la impresión de ser, cuando existió como ejército comandado por un secretariado de forma vertical y autoritaria bajo las condiciones de la confrontación armada, algo completamente distinto a dirigir un partido en la legalidad y en las condiciones de una sociedad urbanizada y diferente a la que se percibía desde la guerra en el campo, es hoy una quimera.

No existe un partido unido y cohesionado en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, sino distintas tendencias y un proceso acelerado de atomización que ha afectado a sus bases y simpatizantes, pero sobre todo que impactó negativamente en la base guerrillera misma que ha perdido la confianza en el proceso y hasta en la vieja dirección, así haya quienes sigan firmes y confiados en que es posible mantener el proyecto histórico y lo acordado a flote.

Los acontecimientos confirman más la tesis de la derrota estratégica del proyecto de las FARC y eso sería ventajoso, se dirá, para la derecha y la clase dominante.

De hecho, la decisión radical de Jesús Santrich de hacer una huelga de hambre que suspendió, a raíz de la decisión que tomó la JEP de suspender el trámite de extradición a las cárceles de Estados Unidos pero que no se sabe si la retomará, a partir del montaje "casi" perfecto que armaron entre un anticomunista consumado y alfil de la oligarquía, el fiscal Néstor Humberto Martínez y la DEA, contra un hombre de principios y dispuesto a acabar su vida como rebelde y revolucionario, ha dejado como legado a sus bases el mensaje de que es más digno sacrificarse que aceptar de brazos cruzados la traición, el incumplimiento y la humillación. No se sabe qué impacto tendrá su decisión, de retomar la huelga de hambre, ni las consecuencias sobre el

moribundo acuerdo, en la continuidad o no del conflicto armado; pero sin duda envía un mensaje de incertidumbre y de lo que le puede esperar al ELN.

Así mismo, el traslado de Iván Márquez al sur del país, región de la retaguardia histórica de las FARC, manteniendo una crítica contra los montajes e incumplimiento de los acuerdos y tal vez con un dejo de autocrítica que no ha hecho pública el engaño a que los llevaron en un juego en que Santos apostó como el avezado tahúr que ha sido, y ellos como los experimentados estrategas de la lucha guerrillera pero malos jugadores en la mesa, es una señal más en dirección al fracaso de los acuerdos.

Santrich y Márquez representan una de las tendencias ideológicas dentro de las FARC y eso ya no es un secreto, ni debe alarmar tampoco a nadie *a estas alturas del partido*. Cuentan con respaldo en una parte importante del nuevo partido y en la base guerrillera. Sostuvieron durante las discusiones y negociaciones en la Habana la tesis de que no se debían entregar las armas antes de la firma y de que se cumpliera el acuerdo en su totalidad, y que las armas se dejaban de usar mientras no hubiera necesidad de hacerlo, se las podía silenciar, como lo demostró el prolongado cese bilateral del fuego. Partían de que había que tener en cuenta la experiencia histórica de negociaciones como la del IRA irlandés con el gobierno británico y los anteriores procesos de negociación-acuerdo-incumplimiento-fracaso, y siguen desconfiando, los asiste la razón, de la capacidad de compromiso de la oligarquía colombiana.

Defienden la visión marxista-leninista del nuevo partido, en el congreso de fundación y legalización de éste defendieron esa línea, ganaron el debate sobre el nombre del partido y de conservar las siglas históricas de las FARC, pero perdieron en el artículo 5° de los estatutos referente a la caracterización de partido comunista marxista-leninista; contra la otra tendencia que encabezaron Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Carlos Losada, etc. De ahí la permanente disputa y tensiones al

interior del nuevo partido, que se ha hecho pública desde que se iniciaron los diálogos en La Habana.

¿A cambio de qué, de un acuerdo que difícilmente les iban a cumplir? ¿Confiaron completamente en su propia fuerza, cohesión y capacidad de negociación? ¿Pensaban que la sociedad colombiana estaba preparada para un acuerdo definitivo de paz? ¿Negociaron porque estaban derrotadas militar y políticamente? ¿Les ganó el tahúr de Santos la partida de póker?

15. La importancia de un movimiento social en Colombia

En Colombia existe un movimiento social diverso, multicultural y pluriétnico, pero es débil, desarticulado y coyuntural. Ha soportado la estigmatización, la persecución, la cárcel y el asesinato de muchos de sus líderes y sus bases, y debido a ello es que su impacto e influencia en el conjunto de la sociedad es limitado. Con mayor presencia y capacidad organizativa y de movilización en el campo que en las grandes ciudades, y ese sería uno de sus principales problemas a resolver.

De hecho, la carencia de un movimiento nacional en favor de la paz y que se apropiara de los acuerdos como un objetivo supremo de la sociedad, que aglutinara las mayorías, permitió a la derecha ganar el plebiscito de refrendación de los acordado en La Habana y mantener por todos los medios (la mentira, el miedo, la represión, el asesinato de líderes sociales, el incumplimiento del acuerdo) el consenso mayoritario en contra del acuerdo de paz.

La tesis que aquí se arriesga, es que no hay claridad en cuanto a la definición del nuevo sujeto histórico del cambio y que los movimientos sociales que hasta ahora han incursionado en la vida política del país no han sido capaces de trascender su propia particularidad y circunstancia ideológica.

Salvo una visión dogmática de la lucha de clases, el sujeto histórico del cambio dejó de ser exclusivamente el proletariado industrial

organizado y dirigido por el partido comunista y cuyo papel central fue la de ser el brazo político y la vanguardia de la lucha de clases y la transformación revolucionaria de la sociedad hasta entrados los años 80s o época dorada del fordismo, cuando producto de la ofensiva del capital, el impacto del neoliberalismo, la tercerización laboral, la represión y dominio ideológico y cultural de la clase capitalista trasnacional, se transformó y debilitó tanto que tuvo que replegarse hacia una posición de derrota que no ha sido superada, particularmente en éste país.

El debate sobre quién o quiénes encarnan el sujeto de cambio sigue aplazado en Colombia, por múltiples razones que no son objeto de este ensayo. No obstante, el nuevo sujeto que se constituya no podrá simplemente repetir la consigna de que el proletariado industrial organizado en el partido será el principal o único sector social que lo encabece o jalone, porque restaría el carácter diverso, pluriétnico y multicultural que identifica a la sociedad actual, excluyendo sectores sociales y grupos de interés que también hacen parte de la lucha de clases que se está librando intensamente en todas partes.

El reconocimiento de este hecho lleva necesariamente a la conclusión de que uno de los principales objetivos que tendría que trazarse el movimiento social, es la articulación del nuevo sujeto político del cambio que, como se ha argumentado aquí, debe incluir, convocar y llamar a los nuevos grupos, ciudadanías y subjetividades que hayan surgido a partir de la dinámica de cambio que arrastra toda sociedad.

Así, los sectores obreros, campesinos, pueblos originarios y afros que históricamente han asumido este papel particularmente en Colombia por la realidad social, histórica y cultural que los determina, podrán proyectarse estratégica y políticamente a convocar y desatar el movimiento social urbano.

Tal vez, lo más fundamental en esta etapa de transición es la consolidación de un movimiento social de nivel nacional y base local-regional, hacia la concreción de un proyecto político para el cambio

democrático, y el tránsito de la guerra hacia un acuerdo o pacto nacional por el fin del conflicto armado, que tenga la legitimidad y el respaldo mayoritario que no tuvo el actual Acuerdo ni los anteriores cuatro intentos fallidos de paz desde la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, que desmovilizó treinta mil guerrilleros liberales, pasando por los acuerdos de Belisario Betancur (1982-1986), Cesar Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002) hasta el actual acuerdo de Juan Manuel Santos que desmovilizó y desarmó a más de siete mil guerrilleros y guerrilleras de las FARC.

Por supuesto, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Minga Indígena, el movimiento de miles de familias campesinas que dependen del cultivo de la planta de coca y otras expresiones sociales, políticas y culturales que reúnen a amplios sectores al rededor del tema del género, los derechos humanos, de grupos humanos discriminados como el arcoíris LGTBI, el movimiento cannábico, grupos ambientalistas y defensores de los derechos de los animales y una inmensa pléyade de grupos de interés, han llegado a concurrir en escenarios de movilización, lucha y reivindicaciones, generando coyunturas únicas e importantes pero que no trascienden lo del momento, lo coyuntural.

Una de estas grandes manifestaciones fue la que convocó y realizó el paro nacional agrario del 2013, desde una plataforma como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, paro que fue respondido por el Estado de la forma que ya se sabe, con represión y asesinatos de campesinos, indígenas y afros, y que pese a ello se hizo fuerte en el sur del país, en el Catatumbo, Cauca, Valle, Antioquia, Chocó, Arauca, Eje cafetero, logrando paralizar por varios días el país y presentar un pliego de peticiones unificado que fue prácticamente incumplido por el Estado.

De tal manera que, la propuesta con la cual surgió Marcha Patriótica fue principal, pero no únicamente, levantar con fuerza la bandera de los diálogos de paz desde el 2010 coincidiendo con el bicentenario de la Revolución de Independencia, objetivo a mediano plazo que podría decirse logró en tanto ayudó a ambientar y movilizar la opinión a favor

del diálogo y el acuerdo de paz que se firmó entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, bandera de lucha que sigue vigente, más ahora que se evidencia el fracaso del Acuerdo Final.

Ahora bien, el objetivo de proyectarse hacia un movimiento social de carácter nacional, amplio, pluriétnico y diverso, más horizontal que vertical, que aglutine y articule las históricas reivindicaciones del campo con las de las ciudades donde el movimiento urbano juvenil, caracterizado por su rica iniciativa, diversidad y pluralidad, pueda jugar un papel más decisivo, le implica a un nuevo movimiento social asumir las reivindicaciones y luchas de la población urbana que ha sufrido la exclusión y negación como sujeto de cambio, objetivo político que no lo logró la Marcha Patriótica debido a la complejidad del contexto y la coyuntura en que surgieron, pero también debido a la falta de claridad en su proyección estratégica y estructuración como movimiento social y político.

Tal vez uno de los problemas que no fue capaz de superar fue la falta de claridad para diferenciar entre lo que es un movimiento social incluyente caracterizado por la diversidad, flexibilidad, amplitud y plasticidad de los sectores sociales en tanto sujetos partícipes directos del cambio; de lo que es un partido político de militantes disciplinados y formados ideológicamente en el comunismo, que la llevó a perder el norte y la capacidad de convocatoria, influencia y perspectiva.

No se sabe, aunque es probable, si este tipo de problema aplica para otros movimientos sociales diferentes a Marcha Patriótica, que centró su esfuerzo y direccionamiento en articular un amplio número de organizaciones y colectivos de diferente composición y carácter pero que erró en ello, en parte, porque así su dirección tuviera en la cabeza la idea de un movimiento social, en la praxis se comportó, más hacia adentro que hacia afuera, como un partido.

Y es bien sabido que un partido comunista marxista-leninista no está constituido por sujetos plurales y diversos, pluriétnicos y multiculturales, sino por un proletariado con una consecuente

consciencia de clase, disciplinado, si es que ese carácter es defendido por algún partido comunista hoy.

El modelo clásico y ortodoxo de partido no ha servido de instrumento organizativo determinante y aglutinador en las recientes experiencias históricas de movimientos alternativos al capitalismo, como ha sucedido en el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, por ejemplo, con la excepción de Cuba, quienes precisamente como sabios consejeros han llamado a no copiar modelos ni a repetir errores, sino a inventar para no fracasar.[32]

Si el reto es la conquista del poder presidencial para producir un viraje y cambio, se tendrán que tejer finamente los asuntos concernientes al carácter, naturaleza, composición y proyecto (programa-objetivos) del movimiento social de base local-regional y de nivel nacional.

Donde su tarea principal sería abanderarse de la plataforma de lucha por el cambio a partir de un pacto nacional por la paz y el fin del conflicto armado con garantías reales, que comprometan al Estado, no a la delegación de un gobierno y de una guerrilla, que trascienda la esfera gubernativa misma y se movilice a nivel nacional por dicha agenda más allá de un programa en particular aunque coyunturalmente esa sea su bandera de lucha, partiendo de la realidad concreta, de sus límites, capacidad de expansión y alcance, en el mediano y largo plazo.

Conclusiones

El *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*, es el causante de que se haya reabierto un debate postergado por más de 50 años, sobre la confrontación armada y la gigantesca tragedia humanitaria que esta causó a la sociedad.

Es un hecho que no se puede soslayar, los diálogos y el acuerdo que se alcanzó dividieron y polarizaron a la sociedad en dos: quienes estaban a favor de estos y una paz duradera, y quienes se opusieron y dejaron ver su inclinación porque la guerra siguiera y finalizara, falsa ilusión, con vencidos y vencedores; dividió a la misma oligarquía en dos, a los uribistas y la extrema derecha que siempre negó la existencia del conflicto armado y buscaba derrotar al enemigo histórico, las guerrillas, en el campo de batalla lo cual no pudo en décadas; y al santismo que lo único que lo diferenciaba del uribismo es que buscaba la derrota de éstas en la mesa de negociaciones, desarmarla y desmovilizarla, lo cual consiguió porque partió de que estaba debilitada y sin condiciones para continuar la lucha armada; y por último dividió y puso a las mismas FARC en una situación de derrota estratégica, tesis que muchos negarán y no compartirán por el hecho de que existe un partido legal, unos recursos que les asignarán, la protección y seguridad relativa a su comandancia que hasta ahora se ha cumplido, más no con sus bases que vienen siendo eliminadas lentamente por ahora, y la

disposición de continuar desde el partido, a pesar de que la realidad diga lo contrario, pero ante las evidencias contundentes vale más reconocerlo que negarlo.

Los diálogos que se iniciaron en el 2012 encerraban un potencial de cambio y transformación profundo, que la sociedad colombiana no fue capaz de entender, porque probablemente no estaba preparada para ese inmenso reto histórico. Lo que significa, como están demostrando los hechos, un nuevo fracaso que aleja la posibilidad real de finalizar la confrontación armada y que por ahora seguirá teniendo prevalencia la violencia.

Uno de los problemas del *Acuerdo Final*, obra de Santos, fue la polarización e incertidumbre jurídica que produjo la pérdida del plebiscito el 2 de octubre de 2016. Lo cual trajo problemas a ambas partes, pero de la cual ha sacado ventaja la derecha aprovechándose perversamente del miedo como estrategia de control y manipulación de la opinión pública. Esa fue la razón principal por la que ganó, marginalmente, el No.

Lo que se creyó y concibió como la posibilidad histórica para dar el salto de la guerra a la paz, siempre y cuando se contara con el apoyo y apropiación mayoritario de la sociedad, se está convirtiendo en un viaje de regreso al pasado.

Es bien sabido que el paramilitarismo es hoy como ayer, así las principales instituciones del Estado lo nieguen, una de las mayores amenazas para lograr un real y firme acuerdo de paz en cualquier momento que se intente. A pesar de esto, continúa la ola de asesinatos de activistas de base de las organizaciones sociales, blancos de ataques de fuerzas de extrema derecha ligadas a estructuras institucionales que las protegen y apoyan. Así el Fiscal general y el Ministro de Defensa nieguen la sistematicidad en los crímenes y los quieran hacer ver como *líos de faldas* u otras motivaciones distintas a su razón de ser como activistas y defensores de Derechos Humanos.

Hoy los asesinatos contra el movimiento social se llevan a cabo a "cuenta gotas", y si se compara con el período que arranca desde

mediados de los años 80s, el exterminio no es a "chorros" como sucedió por ejemplo con la Unión Patriótica (UP) y otros movimientos políticos de aquellos años, pero no hay que confiarse en que seguirá así, puede empeorar y convertirse el proceso en una nueva masacre. Claro que esta vez no se sabe si quienes han hecho y cumplido el acuerdo y se han reincorporado se van a cruzar de brazos esperando que los exterminen, quizás el suicidio político no los halague tanto como las disidencias.

La alianza de la restauración conservadora con el Centro Democrático a la cabeza, empresarios y grandes terratenientes ha sido la más peligrosa y criminal amenaza a la paz social y al cambio democrático. Quienes incluso han llamado a la *resistencia civil*, invocando el tiranicidio apoyados en teólogos cristianos como Santo Tomás de Aquino o en conservadores radicales como Laureano Gómez.

Y esa alianza de la muerte sigue contando con grandes medios de comunicación y una matriz de opinión bien conocida, que es la que junto a los J. J. Rendón se ha encargado de crear el consenso social en la mayoría para perdonar y justificar el incumplimiento del gobierno y del Estado, pasando inclusive por la eliminación de las mismas FARC, pues esta facción de la oligarquía siempre ha estado convencida que puede ganar la guerra.

La visión conservadora y cerrada que tiene de la sociedad la extrema derecha, que se opone a la paz e insisten en continuar la guerra, es uno de los grandes frenos para la reconciliación, ya que dichas fuerzas están en contra de la conquista de los derechos de amplios grupos humanos. Esta tendencia se ve como heredera de la hegemonía conservadora que gobernó el país con Mariano Ospina (1946- 1950) y Laureano Gómez (1950-1951), y que condujo a la sociedad a la catástrofe (época de la Violencia) y guerra irregular que se ha prolongado hasta hoy.

Este escenario se da, hay que reconocerlo, porque el consenso a favor de los acuerdos es el derrotado, y la sociedad en su conjunto no se asume o no está preparada para la defensa de lo acordado, ni hoy lo siente suyo, todo lo contrario, como se ha argumentado aquí.

Tal vez uno de los mayores errores del Acuerdo Final que tendría que tener en cuenta el ELN, es que fue un acuerdo de partes, guerrilla-gobierno, donde ni siquiera el Estado fue comprometido, porque hasta ahora y en los sucesivos intentos para acordar el fin del conflicto, no ha habido esa disposición. Tampoco se trataba de tener el mejor y más amplio respaldo y acompañamiento de la comunidad internacional, al final de cuentas es lo poco o único que queda de los acuerdos. Pero en materia de orden normativo interno es poco o casi nada lo que pueden hacer, aparte de apoyar con recursos al Estado y las ONGs que se nutren de sus ayudas. Hasta les queda difícil monitorear y fiscalizar sus aportes. La tradición corrupta de Colombia cuenta con una Facultad especializada en esta "profesión".

Trayendo a colación la experiencia del Vietcong, cuando le ganaron la guerra al imperialismo norteamericano en los 70s, la delegación vietnamita que viajó a París se reunió y decidió el acuerdo que selló el triunfo y retiro de tropas norteamericanas con la delegación de aquella potencia porque contaban con toda la legitimidad del pueblo vencedor. Claro está que esa fue una guerra de liberación en el contexto de los años de la guerra fría y la división del mundo entre campo socialista y capitalista, una situación muy diferente a lo que ha sucedido en la guerra interna en Colombia.

Cabrá decir que cualquier nuevo acuerdo o proceso de paz que se intente, ¿será más conveniente y seguro hacerlo directamente con representantes de la potencia imperialista? Porque lo que está pasando es que, a pesar de ser el principal respaldo militar de la oligarquía colombiana, no le importa tener un representante en los diálogos y al otro día desconocerlos, o ¿qué otra cosa es el montaje de la DEA y el FBI y la insistencia en la extradición de exjefes de las FARC como en el caso de Santrich? ¿O su insistencia en una guerra antidrogas tan criminal, innecesaria y destructora como el conflicto mismo? ¿No será mejor en el futuro para la guerrilla pensar en negociar con ellos directamente?

Peor aún, se firmó un *Acuerdo Final* en el cual la sociedad no fue el objeto principal del mismo, sino algunos sectores sociales que son parte de ella, y que si bien son fundamentales como las Víctimas, las mujeres, las miles de familias campesinas que viven de cultivos ilícitos, los pueblos originarios y los afros, quedó por fuera la mayoría de la población urbana que ha vivido el conflicto y la guerra distante y diferente a como lo han vivido las comunidades en el campo y las regiones donde el conflicto fue intenso. Reconózcase con franqueza, no hubo el movimiento social lo suficientemente organizado, amplio y capaz, para asumir este reto histórico.

Y este error, difícil de imputar a alguien en particular, porque es ante todo el fracaso de la sociedad, es el que ha permitido que el consenso sea en contra del proceso de paz. Cuando la única forma de ganar el consenso en favor de éste era comprometer a la sociedad mayoritariamente como el sujeto fundamental al que estaba dirigido el *Acuerdo*, y no exclusivamente a la guerrilla ni al gobierno, como ha sucedido con los 4 intentos anteriores desde Rojas Pinilla en 1953 hasta hoy.

El proceso y la tensión que están generando las contradicciones resultado del *Acuerdo*, como la oposición y resistencia que surgieron contra éste, irán dibujando los contornos de la *nueva* nación colombiana, donde es clave el papel que juegue el Estado en adelante. Pues dependiendo de la fuerza que determine su comportamiento y rumbo, será el cambio o el continuismo que experimente la sociedad.

Porque si lo que buscaban los acuerdos, además de su objetivo principal de acabar el conflicto armado, era la profundización de la democracia para que una minoría no siguiera usufructuado para su beneficio exclusivo la riqueza de la nación, y poder llevar a cabo por medio de un gobierno de nuevo carácter en el marco de la legalidad constitucional, una distribución más democrática de ésta para construir una sociedad más equitativa, dicho propósito sigue vigente; entonces lo que hay que preguntase es si dicho tránsito se podrá hacer sin recurrir a las armas, y la respuesta a esa pregunta, ¿quién la tiene?

Sirva lo anterior para señalar que el Acuerdo de paz que se acaba de firmar con apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional, en particular de Cuba, Venezuela y Noruega, creó una muy bien fundada ilusión de que este iba a ser el que sí propiciaría la *paz estable y duradera*; e iba, además, a contribuir a mejorar el clima de inestabilidad e inseguridad que se ha vivido por décadas en la región de fronteras, ilusión que borró de un tajo la reactivación del conflicto armado interno que se creyó resuelto, a través de las llamadas "disidencias" que crecen cada día con cada disparo y cada muerto de los exintegrantes de las FARC hoy legalizados, con cada líder o lideresa social impunemente asesinado.

Las disidencias se están convirtiendo en el principal tributario del fracaso de los acuerdos y esa realidad se está expresando con mayor fuerza en las comunidades de las fronteras con Venezuela y con Ecuador; siguen siendo las principales afectadas, no los gobiernos, sus mandatarios y altos funcionarios que viven bajo la comodidad que ofrece una oficina en la capital. ¿Por qué no han revelado, por ejemplo, lo que sucedió con los periodistas asesinados en la frontera con Ecuador? ¿Por qué Santos y su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, guardan silencio?

El derecho a fracasar no es exclusivamente de los individuos, también es un derecho de los pueblos.

Notas

[1] "Sentencias de José Antonio Galán y Compañeros, [1781]", en Juan Friede, *Rebelión Comunera de 1781*, *Documentos*, Tomo II, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1981, pp. 626-627. <<

[2] "Guadalupe Salcedo muerto hoy en Bogotá", El Independiente, junio 6 de 1957, p. 3. <<

[3] Citado en Pedro Nel Suarez, *¿Quién mató al capitán?* (http://www.alcarajo.org/quien-mato-al-capitan/). <<

[4] https://especiales.semana.com/el-asesinato-de-dimar-torres/index.html <<

[5] https://lasillavacia.com/nuestras-armas-dejadas-jamas-volveran-guerra-78112 <<

[6] *Ibid*. <<

[7] Indepaz, Informe de masacres en Colombia durante el 2020. Con corte 25 de agosto de 2020. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/08/Masacres-en-Colombia-2020-INDEPAZ-25-agosto-2.pdf. <<

[8] Vicky Dávila, "Álvaro Uribe". *Semana*, agosto 1 de 2020. Disponible en: https://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe/690940. <<

[9] https://www.radiomacondo.fm/noticias-nacionales/ejercito-asesina-a-campesino-en-zona-rural-de-cucuta/ <<

[10] Sinar Alvarado, "El espionaje volvió a la política colombiana". *The New York Times*, enero 17 de 2020. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2020/01/17/espanol/opinion/chuzadas-

colombia.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article. <<

[11] Sinar Alvarado, "Un ejército de agresores camuflados". *The New York Times*, julio 21 de 2020. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2020/07/21/espanol/opinion/colombia-ejercito.html. <<

[12] *Semana*, enero 29 de 2019. <<

[13] Citado en Sebastián Forero Rueda, *Así va el Acuerdo de Paz: la deuda con la Reforma Rural Integral*. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2020/07/21/espanol/opinion/colombia-ejercito.html <<

[14] Juan Goméz Tobón y Ariel Avila, "El ejército antirrestitución y la guerra contra los reclamantes", *El Espectador*, abril 13 de 2019. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-ejercito-antirrestitucion-y-la-guerra-contra-los-reclamantes/. <<

[15] https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-despues-del-acuerdo-de-paz-con-las-farc/41088 <<

[16] Los diálogos de La Habana entre el Gobierno Nacional, presididos por Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012. <<

[17] Roque Dalton, escritor, poeta y revolucionario salvadoreño (1935-1975), en su libro *Miguel Mármol*, escrito en primera persona, describe aquellos sucesos y la vida del legendario líder comunista Miguel

Mármol y su participación en el levantamiento popular y campesino de 1932 en El Salvador. <<

[18] Lo que se proponía la *Alianza para el Progreso*, según la docente e investigadora del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, Diana Marcela Rojas (2010), fue: "Mover las sociedades 'tradicionales' hacia sociedades 'modernas' por medio del incentivo a la realización simultánea de programas sociales, crecimiento económico, reformas..." (p. 91-124). <<

[19] Harnecker, Marta. (1998) *La izquierda en el umbral del siglo XXI*. Bogotá, Colombia. Editorial Desde Abajo, p. 40-41. <<

[20] Titular del diario *El Mundo* de España del 17 de noviembre de 2010: "Miles de documentos confirman que EEUU apoyó el golpe de Pinochet en 1973". <<

[21] Hubo al menos dos momentos en el proceso de conformación de las guerrillas en Latinoamérica. El primero va desde el triunfo de la Revolución cubana, hasta finales de los 70, donde se evidenció un declive por el carácter foquista de ellas, por las derrotas de algunas, así como por la división que se da en el campo socialista en el mundo. A partir de los 80s se da otro impulso de formación de nuevas guerrillas bajo condiciones diferentes, como es el caso de la guerrilla Zapatista e indigenista de Chiapas, en México, y otros casos recientes. <<

[22] Centro de Estudios Legales y Sociales. *Cuatro claves para entender el Plan Cóndor, la empresa de la muerte creada por regímenes militares en Sudamérica*, 27 de mayo de 2016. <<

[23] En *Correo del Orinoco*, volumen 1 volumen 128, p. 318. <<

[24] Ibidem. <<

[25] Se conoce como el impuesto al gramaje lo que las FARC-EP le cobraban principalmente a los narcotraficantes por cultivos, supervisión,

producción, distribución y transporte de droga, por el mantenimiento y supervisión de pistas de aterrizaje clandestinas, de laboratorios de producción de drogas, y por cada gramo de cocaína producida; como también a los campesinos que plantaban coca, amapola y marihuana. <<

[26] Otto Morales Benítez, presidente de la Comisión de paz durante el gobierno de Belisario Betancur, en carta de renuncia el 25 de mayo de 1983, le expresó a este que lo hacía, entre otras razones, por los poderosos enemigos de la paz que estaban agazapados por fuera y por dentro del gobierno que buscaban torpedearla. <<

[27] https://www.elpais.com.co/colombia/plan-cumple-10-anos-de-lucha-contra-el-narcotrafico.html <<

[28] https://www.elespectador.com/opinion/las-licencias-de-uribe-columna-752711/ <<

[29] El periódico británico *The Guardian* publicó un artículo el 8 de mayo de 2018 donde aseguró que el ejército colombiano había asesinado a miles de civiles, más de los que se han reportado, apoyándose en un estudio realizado por el excoronel de la policía y sociólogo Omar Rojas Bolaños y el investigador Fabián Leonardo Benavides, en el libro: *Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2000-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios*. Editorial U. Santo Tomás, 2017. 254 páginas. <<

[30] Ver entrevista de la revista *Semana* al arzobispo Darío Monsalve, del 1 de diciembre del 2011 (https://www.semana.com/nacion/articulo/a-cano-no-preservaron-vida-arzobispo-cali/250198-3/). <<

[31] El término "terrorismo" adquirió un auge y tendencia global a partir del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 por parte de grupos islamistas radicales que han acumulado un odio por Estados Unidos y las grandes potencias mundiales tan grande, que se ha propagado a las capitales europeas, a raíz de las invasiones y guerras

desatadas por la invasión a países como Irak, Afaganistán, Libia, Siria y la amenaza de invadir otros, como Irán. La Doctrina de la Guerra permanente o Guerra global contra el terrorismo, que lanzó George W. Bush a partir de 2002, fue adaptada a las condiciones del conflicto armado interno en Colombia por Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) durante su primer año de gobierno. <<

[32] Ver Isabel Rauber, *América Latina. Movimientos sociales y representación política* (https://rebelion.org/docs/4518.pdf) <<

Autor

Oto Higuita es Licenciado en Historia Económica por la Universidad de Estocolmo.

Articulista de opinión, ensayista y activista del movimiento social, defensor de los acuerdos de paz.